

TRABAJO FIN DE GRADO:

“INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS”

LAURA TOREA LUCES
4º CURSO DE GRADO EN DERECHO
TUTOR: CARLOS AYMERICH CANO

SUMARIO:

A. INFORME RAZONADO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS EN RELACIÓN CON EL BUQUE “POBRE MITROFÁN”.

1. Antecedentes.
2. Consideraciones jurídicas sobre las Aguas Interiores, Mar Territorial, Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva y Alta Mar.
3. Conclusión.
4. El decomiso.

B. INFORME RAZONADO SOBRE LAS SOLICITUDES DE ASILO.

1. Antecedentes.
2. Consideraciones jurídicas sobre el asilo.
3. Análisis sobre la solicitud de asilo de los tripulantes de Dinamarca, Perú y Filipinas.
4. Conclusión de la solicitud de asilo de los tripulantes de Dinamarca, Perú y Filipinas.
5. La mutilación genital.
6. Análisis y conclusión de la solicitud de asilo de los tripulantes de Burkina-Faso.
7. La agrupación familiar.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

C. INFORME RAZONADO SOBRE LAS SOLICITUD DE LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

1. Antecedentes.
2. Consideraciones jurídicas sobre los derechos de los extranjeros.
3. Análisis y conclusión sobre la prestación de hijos menores a cargo.
4. Análisis y conclusión sobre la prestación por desempleo.
5. RISGA.

D. INFORME RAZONADO SOBRE EL ACTA DE INFRACCIONES LABORALES.

1. Antecedentes.
2. Consideraciones jurídicas sobre el acta de infracción laboral.
3. Análisis sobre el acta de infracción laboral.
4. Responsabilidad y conclusión sobre la infracción laboral.
5. La trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

E. INFORME RAZONADO SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR “SIVESTRE-HOLMS”.

1. Antecedentes.
2. Responsabilidad sobre el tráfico ilícito de migrantes.
3. Responsabilidad sobre el delito de contrabando de tabaco.
4. Incompatibilidades.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

5. Las prerrogativas.

6. Conclusión.

F. INFORME RAZONADO SOBRE LOS CONTRATOS
MERCANTILES.

1. Antecedentes.

2. Consideraciones jurídicas sobre el
contrato de fletamento.

3. INCOTERMS.

4. Conclusión.

G. CONCLUSIONES.

ANEXO I.

ANEXO II.

ANEXO III.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

A. INFORME RAZONADO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS EN RELACIÓN CON EL BUQUE “POBRE MITROFÁN”.

1. Antecedentes.

El 30 de diciembre de 2013, patrulleras de la guardia civil interceptan a 50 millas de las costas gallegas el buque “Pobre Mitrofán”, con pabellón, Español, procedente de Mauritania, del que se sospechaba que realizaba actividades de contrabando. Durante la inspección del barco, los agentes incautan 2000 cajetillas de tabaco y detienen a todo los miembros de la tripulación.

Para poder resolver la controversia planteada sobre si las autoridades españolas actuaron o no con legalidad al interceptar el buque “Pobre Mitrofán”, antes debemos conocer hasta donde llega la soberanía del Estado español.

2. Consideraciones jurídicas sobre las Aguas Interiores, Mar Territorial, Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva y Alta Mar.

La soberanía del Estado ribereño sobre sus aguas interiores y territoriales comprende un conjunto de competencias legislativas, administrativas y jurisdiccionales cuyo contenido se traduce en el ejercicio de su poder de coerción en esas aguas.

Tanto el Convenio sobre Mar Territorial de 1958 como la Convención de 1982 definen las aguas interiores por exclusión. Se entienden por tales las aguas marinas o no continentales que tienen su límite exterior en el mar territorial y el interior en tierra firme¹.

El Estado ribereño, salvo uso o convenio en contrario, puede rehusar el acceso a sus aguas interiores a los buques extranjeros excepto en caso de peligro, en tanto que en el mar territorial los buques extranjeros gozan de un derecho de paso inocente que comprende también parar o anclar si la navegación, un peligro o fuerza mayor así lo exigiera.

El acceso a los puertos de buques extranjeros se beneficia del principio consuetudinario de la libertad de navegación y comercio, que prohíbe en tiempo de paz cualquier dificultad o impedimento a la navegación hacia o desde ellos. La razón principal por la que los ribereños han controlado rigurosamente el acceso a sus aguas

¹ Artículo 5.1 del Convenio de 1958 y artículo 8.1 en relación con el artículo 2.1 de la Convención de 1982.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

interiores, es que estas aguas se encuentran en íntima relación con la tierra y permiten un fácil acceso a ella, con los riesgos consiguientes para su integridad. El concepto de aguas interiores se concibe como una extensión del territorio, afectando a las aguas de puertos, bahías y estuarios, es decir, a aguas estrechamente ligadas y subordinadas al dominio terrestre.

Por lo tanto, el Estado ribereño ejerce casi sin limitaciones sus competencias sobre las aguas interiores, lo mismo que sobre territorio terrestre y puede reservarlas exclusivamente para la pesca de sus nacionales y la navegación de buques de su bandera.

Se consideran igualmente aguas interiores los llamados mares interiores, siempre que sus orillas pertenezcan en su integridad a un solo Estado, y a la anchura del estrecho o paso de acceso al mismo no supere el doble de la anchura del mar territorial.

Salvo por razones sanitarias o de orden público, los Estados no suelen cerrar el acceso a sus puertos de los buques mercantes extranjeros². Los buques mercantes tendrán la obligación de respetar las leyes y reglamentos del Estado a cuyo puerto arriban y mientras permanezcan en él durante su estadía.

La Unión Europea ha adoptado numerosas normas internas para la transposición de directivas comunitarias que persiguen la armonización de los ordenamientos internos de los Estados miembros. Se trata de regular el cumplimiento, sobre todo por el Estado de abanderamiento, de la normativa internacional sobre seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y trabajo en los buques extranjeros que utilicen puertos o instalaciones situadas en aguas españolas. Los procedimientos de inspección y reconocimiento de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo la jurisdicción de los Estados miembros; y las condiciones mínimas exigidas a los buques que transporten mercancías peligrosas o contaminantes con origen o destino en puertos marítimos nacionales.

El control por el Estado del puerto de cumplimiento de las normas de seguridad marítima por parte de los buques que hagan escala en puertos de la Unión Europea se ha establecido por la Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009.

Por lo que se refiere al ejercicio de la jurisdicción penal por el Estado huésped, la mayoría de las legislaciones admite que en los casos de faltas y delitos cometidos a bordo entre tripulaciones extranjeros, sin repercusión exterior y sin intervención de ningún nacional, se abstengan las autoridades locales de conocer e intervenir a favor de los cónsules del Estado del pabellón del buque.

La soberanía del Estado ribereño se extiende, más allá de su territorio y aguas interiores, a una franja adyacente tradicionalmente denominada mar territorial. El mar territorial son las aguas comprendidas desde donde terminan las aguas interiores hasta

² Garantizado para los Estados parte en el Convenio de Ginebra de 9 de Diciembre de 1923 sobre régimen internacional de los puertos marítimos.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

12 millas más allá, ejerciendo el Estado español su soberanía sobre la columna de agua, el lecho, el subsuelo y los recursos de ese mar, así como el espacio supra yacente.

La regulación del Mar Territorial se establece en el Convenio de 1958 sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua y en la Convención de 1982. El régimen jurídico del mar territorial viene determinado por el principio de la soberanía del ribereño sobre esas aguas, matizando por ciertas excepciones fundamentadas en el principio de la libertad de comercio y navegación, siendo la excepción más importante el derecho de paso inocente.

En relación con el control de la seguridad de la navegación y la reglamentación del tráfico, primer apartado de la lista de materias del artículo 21 que están sujetas a la voluntad reguladora del ribereño, esta cláusula representa la facultad del ribereño para establecer vías marítimas y esquemas de separación del tráfico aplicables en principio a cualquier buque extranjero que pase por su mar territorial, y en particular a los buques de características especiales.

Otra de las excepciones al principio de soberanía del ribereño sobre su mar territorial afecta al ejercicio de su jurisdicción civil y penal en esta agua. El convenio de Ginebra de 1958 y la Convención de 1982 dicen lo siguiente:

Respecto de la jurisdicción civil ³ :

“El Estado ribereño no deberá detener ni desviar de su ruta a un buque extranjero que pase por su mar territorial, para ejercer su jurisdicción civil sobre una persona que se encuentre a bordo”.

Esta regla tiene dos excepciones, la primera es la posibilidad de llevar a cabo medidas de ejecución en materia civil por obligaciones o responsabilidades contraídas por el buque con motivo de o durante su paso por las aguas del Estado ribereño⁴; y la segunda posibilidad es la de tomar medidas precautorias y de ejecución que la legislación del Estado ribereño permita en los casos de detención en el mar territorial o de paso por el mismo procedente de aguas interiores⁵.

Respecto al ejercicio de la jurisdicción penal, la regla general es en principio negativa para el Estado ribereño⁶; pero admite las cuatro excepciones siguientes:

- si la infracción tiene consecuencias en el Estado ribereño;
- si es de tal naturaleza que pueda perturbar la paz del país o el orden en el mar territorial;
- si el capitán del buque o el cónsul del Estado cuyo pabellón enarbola el buque pide la intervención de las autoridades locales;
- si es necesario para la represión del tráfico de estupefacientes.

³ La regla general contenida en los artículos 20.1 del Convenio de Ginebra de 1958 y 28.1 de la CNUDM.

⁴ Artículo 20.2 del Convenio de Ginebra de 1958 y 28.2 de la CNUDM.

⁵ Artículo 20.3 del Convenio de Ginebra de 1958 y 28.3 de la CNUDM.

⁶ Contenida en los artículos 19.1 del Convenio de Ginebra de 1958 y el 27.1 de la CNUDM.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

El Convenio y la Convención distinguen, finalmente, si el buque procede de aguas interiores, en cuyo caso es posible hacer detenciones a bordo o instruir las diligencias que prescriba la legislación del Estado ribereño⁷. Por el contrario, si el buque procede de un puerto extranjero y se encuentra solamente de paso por el mar territorial, sin entrar en aguas interiores, no está facultado el Estado ribereño para proceder a detenciones o a la instrucción de diligencias por las infracciones penales cometidas antes de que el buque entre en su mar territorial⁸, salvo los dispuesto en caso de violación de leyes y reglamentos dictados de conformidad con la parte V⁹ y en la parte XII¹⁰ de la convención de 1982.

Nuestra legislación ha recogido la tendencia a ampliar a doce millas náuticas la extensión de la jurisdicción del ribereño. El proceso de ampliación de la jurisdicción española más allá del límite tradicional de las seis millas que habían alcanzado al menos las competencias fiscales y de pesca ejercidas por la corona española, lo inició la Ley 20/1967, de 8 de abril y el Decreto del Ministerio de Hacienda 3281/1968, de 26 de diciembre¹¹, que extendieron a doce millas las aguas españolas a afectos pesqueros y fiscales, aduaneros y de represión del contrabando.

El artículo 1 del Convenio de Ginebra señala que se entiende por alta mar todas aquellas partes del mar que no forman parte del mar territorial o de las aguas interiores. En la tercera conferencia sobre el Derecho del Mar, dada la evolución de este, la alta mar se ha reducido en el sentido de excluir no sólo al mar territorial y a las aguas interiores, sino también a la Zona Económica Exclusiva¹².

Así pues, se señaló la llamada Zona Contigua que viene definida en el Convenio sobre Mar Territorial y la Zona Contigua en su artículo 24 como “*una zona de alta mar contigua al mar territorial*”, donde el ribereño ejerce la vigilancia necesaria para prevenir o perseguir las violaciones de sus reglamentaciones aduanera, fiscal, de inmigración y sanitaria que puedan someterse o se hayan cometido en su propio territorio o en su mar territorial.

La Zona Contigua se configura así como un nuevo espacio para la protección de ciertos intereses del ribereño en una extensión de mar amplia, que mantiene la naturaleza jurídica de las aguas de la zona como alta mar evitando que el ribereño recurriera en defensa de sus intereses a expansiones unilaterales de su mar territorial.

La Convención de 1982 ha modificado la extensión así como la naturaleza jurídica de sus aguas. En efecto, respecto a su extensión, el artículo 33.1 de la Convención prevé que:

⁷ Artículo 19.2 de la Convención de Ginebra de 1958 y 27.1 de la CNUDM.

⁸ Artículo 19.4 de la Convención de Ginebra de 1958 y 27.5 de la CNUDM.

⁹ La parte V corresponde a la zona económica exclusiva.

¹⁰ La parte XII corresponde a la protección y preservación del medio marino.

¹¹ Modificó el artículo 33 de la Ordenanza de la renta de aduanas.

¹² Artículo 86 de la CNUDM.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

“la Zona Contigua no podrá exceder más allá de veinticuatro millas marinas contadas desde la línea de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial”.

Esta ampliación es consecuencia de la nueva anchura del Mar Territorial fijada en el artículo 3 de la Convención de 1982 en un máximo de doce millas, lo que supone que los Estados que fijen dicho límite quedarían en la práctica sin Zona Contigua por aplicación del artículo 24.2 del Convenio de 1958.

La Convención de 1982, autoriza en su parte V¹³, el establecimiento por el ribereño de una zona económica exclusiva de hasta 200 millas medidas desde la línea de base también usadas para fijar la anchura del mar territorial, que impide ya que la zona contigua forme parte del alta mar, siendo su régimen residual el de la zona económica exclusiva con la que se superpone.

En España con el establecimiento de un Mar Territorial de doce millas¹⁴, era oportuno que se instaurara una Zona Contigua de doce millas para completar la anchura de veinticuatro millas de Mar Territorial y Zona Contigua que hoy autoriza el Derecho Internacional, con el objeto sobre todo de contribuir más eficazmente a la represión del contrabando. Finalmente, el artículo 7.1 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de puertos de Estado y de la Marina Mercante, incluye la Zona Contigua dentro de las aguas *“en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción”*.

El buque “Pobre Mitrofán” fue interceptado a 50 millas de las costas gallegas, con lo que se encontraba en la Zona Económica Exclusiva. Para la Convención de 1982, la zona económica exclusiva se caracteriza por ser un área situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, por estar sujeta a un régimen específico, por ejercer sobre ella determinados derechos de diferentes tipos el Estado ribereño y porque los demás Estados tienen en la zona también determinados derechos y libertades.

Hay que distinguir a la zona económica exclusiva del mar territorial, ya que los derechos que el Estado ribereño ejerce sobre uno y otro no son evidentemente iguales ni tampoco los derechos del Estado costero en su zona económica provienen del ejercicio de la soberanía territorial. Existen una serie de limitaciones del Estado ribereño en la zona económica exclusiva, paralelas a los derechos reconocidos a los demás Estados, que diferencian de forma clara la Zona Económica del Mar territorial.

Los derechos que el Estado ejerce sobre su Mar Territorial son análogos a los que ejerce sobre su territorio y aguas interiores con la limitación relativa al paso inocente. Sin embargo, en la zona económica los derechos del Estado ribereño están en conexión con la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales de la referida zona; y los derechos de terceros, especialmente el relativo a las libertades de comunicación marítima y aérea son prácticamente asimilables a los ejercidos en alta mar.

¹³ Artículos 55 y siguientes de la CNUDM.

¹⁴ Ley 10/1977, de 4 de Enero, sobre Mar Territorial.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

España ha reglamentado por vía interna su zona económica exclusiva por medio de la Ley 15/1978 y la define en su artículo 1.1 como aquella zona marina que se extiende hasta una distancia de 200 millas náuticas, contadas a partir de las líneas de base desde la que se mide la anchura.

El régimen de libertades en materia de comunicaciones en la zona económica no difiere, en líneas generales, del relativo a la alta mar, llegando la Convención a hacer una remisión expresa al régimen de libertades de la alta mar¹⁵. No obstante, el régimen previsto para la zona económica en la Convención difiere del relativo a la alta mar especialmente en:

- la exploración y explotación de los recursos de la zona económica;
- la regulación por medio de leyes o reglamentos internos del Estado costero de lo relativo a la preservación del medio marino en la zona económica;
- la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir sus leyes y reglamentos nacionales que pueden llegar al ejercicio del derecho de visita, inspección, apresamiento y la iniciación de procedimientos judiciales¹⁶, medidas claramente incompatibles con el régimen del alta mar.

El Estado ribereño tiene competencias exclusivas a ejercer en la Zona Económica tales como el establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras, la investigación científica marina o la protección y la preservación del medio marino. Sin embargo la zona económica exclusiva no está concebida como un espacio tan exclusivo como para que los terceros Estados queden privados del disfrute de ciertos derechos de ella. Los terceros Estados tienen derecho a la pesca en la zona económica exclusiva. Los nacionales de terceros Estados que pesquen en la Zona Económica Exclusiva observarán las leyes y reglamentos al efecto del Estado ribereño¹⁷.

El alta mar como mencionamos antes son todas aquellas partes del mar no incluidas en la Zona Económica Exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores del Estado, ni en las aguas archipelágicas de un Estado archipelágico.

El régimen jurídico de alta mar está compuesto de cuatro principios o libertades tradicionales recogidas en el Convenio de Ginebra de 1958 sobre el Alta Mar y en la Convención de 1982.

Uno de estos principios es el relativo a la libertad de navegación que se concreta en el artículo 4 del Convenio de 1958, seguido por el artículo 90 de la Convención de 1982, al decirnos que todos los Estados con litoral o sin él tienen el derecho a que naveguen en alta mar los buques que enarbolan su bandera. El derecho a otorgar la nacionalidad se reconoce a los Estados por el artículo 91 de la Convención de 1982, así como para fijar los requisitos para su concesión y registro del buque y, consiguientemente, para que puedan usar su pabellón o bandera. Con esto el Convenio

¹⁵ Artículo 58 de la CNUDM.

¹⁶ Artículo 73 de la CNUDM.

¹⁷ Artículo 62.4 de la CNUDM.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

de 1958, pretende sin duda reducir el uso y abuso de los llamados “pabellones de complacencia”.

La importancia del derecho al uso de una bandera es extraordinaria, ya que supone que en alta mar los buques quedan sometidos a la jurisdicción exclusiva del Estado de pabellón¹⁸.

A la regla general reseñada de la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón en alta mar para todos los buques, se adiciona para los barcos de guerra¹⁹ y los navíos de Estado destinados a fines no comerciales²⁰, seguidos por los artículos 95 y 96 de la Convención, la regla especial de que gozarán de la completa inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier Estado que no sea el de su bandera.

Esta libertad de navegación tiene ciertos límites como el de piratería marítima, donde todo Estado puede apresar en alta mar o en cualquier otro lugar que no esté sometido a ningún Estado a buques o aeronaves piratas aunque no enarbolan pabellón de dicho Estado. Los tribunales del Estado que hayan efectuado el apresamiento podrán decidir las penas que deben imponerse y las medidas que deben tomarse respecto a los buques²¹.

3. Conclusión.

Como podemos observar el derecho del mar es bastante extenso y requiere de un conocimiento amplio sobre la materia cuando se trata de conocer como y cuando puede el Estado Español actuar sobre buques que enarbolan o no pabellón español.

El caso que nos ocupa es mucho más sencillo que todo lo explicado hasta ahora. No cabe la menor duda de que las autoridades españolas actuaron con legalidad sobre el buque “Pobre Mitrofán”, a pesar de que la soberanía por parte del Estado español sobre la Zona Económica Exclusiva es bastante limitada.

Es bastante limitada excepto en lo relativo a la explotación y exploración de recursos, en la preservación del medio marino y en el interés pesquero que el propio Estado puede llegar a limitar para el uso de pesca de los buques solamente nacionales.

En el ánimo de los autores de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no había otra preocupación al regular la Zona Económica Exclusiva que la de proteger los recursos naturales de esta zona, en beneficios de los Estados ribereños.

¹⁸ Artículo 6.1 del convenio de Ginebra sobre Alta Mar, seguido por el artículo 92.1 de la CNUDM.

¹⁹ Artículo 8 del convenio de Ginebra sobre Alta Mar.

²⁰ Artículo 9 del convenio de Ginebra sobre Alta Mar.

²¹ Artículo 105 del CNUDM.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

El buque “Pobre Mitrofán” no era un buque extranjero sino que portaba pabellón español. Cuando hablamos de pabellón español nos estamos refiriendo a la bandera que llevan los barcos para indicar la nacionalidad a que pertenece o el país de matriculación del navío.

El pabellón que debe ostentar un buque español viene determinado por la Ley 39/1981, de 28 de Octubre²² y su utilización en el Real Decreto 2335/1980, de 10 de Octubre, a tenor del artículo 1 se dice lo siguiente:

“todos los buques y embarcaciones nacionales, mercantes, de pesca, deportivos y de recreo, de servicios portuarios, así como los artefactos flotantes, cualquiera que sea su tipo, clase o actividad, enarbolarán, como único pabellón, la bandera de España”.

El buque “Pobre Mitrofán” ondeaba pabellón español, lo que significa que tiene que cumplir con la legislación española y estar bajo su jurisdicción. Por tanto se encontrara donde se encontrara (Aguas Interiores, Mar Territorial, Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva o Alta Mar), el Estado Español siempre tendría jurisdicción sobre dicho buque.

El artículo 94.1 del Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar muestra los deberes del Estado de Pabellón de los buques y dice lo siguiente:

“Todo Estado ejercerá de manera efectiva su jurisdicción y control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales sobre los buques que enarboleden su pabellón”.

Con lo que la guardia civil española actuó con legalidad sobre dicho buque, así también al detener a todos los miembros de la tripulación, poniendo a disposición de la autoridad judicial a los nacionales de España y al resto de la tripulación (cuatro de Dinamarca, cuatro de Burkina-Faso, dos de Perú y dos de Filipinas) a disposición de la policía, así como por último proceder a decomisar las 2000 cajetillas de tabaco.

4. El decomiso

El decomiso se trata de una pena accesoria de otro ilícito penal como en este caso es el delito de contrabando. Este viene regulado en el artículo 127.1 del Código penal como tipo general e indica lo siguiente:

“toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito”.

²² Artículo 3.5 de la Ley 39/1981, de 28 de Octubre.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar. Los unos y los otros serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquirido legalmente”.

B.INFORME RAZONADO SOBRE LAS SOLICITUDES DE ASILO.

1. Antecedentes.

Cuando interceptan el buque “Pobre Mitrofán”, Las autoridades españolas detienen a todos los miembros de la tripulación entre ellos seis nacionales españoles, cuatro de Dinamarca, cuatro de Burkina-Faso, dos de Perú y dos de Filipinas. Los nacionales españoles son puestos a disposición judicial y el resto de la tripulación es entregada a la policía, presentando acto seguido solicitud de asilo, alegando todos haber sido víctimas de tráfico ilícito de migrantes y además los nacionales de Burkina-Faso señalando también que están huyendo de la mutilación genital a la que serían sometidas sus hijas menores de edad con las que también viajaban si se quedaran en su país de origen.

2. Consideraciones jurídicas sobre el asilo.

Existen dos tipos de asilo, el asilo diplomático y el asilo territorial. En el caso que nos ocupa estamos ante solicitudes de asilo territorial con lo que ya no entraremos a valorar el asilo diplomático. El cual se define como aquel que se concede en instalaciones diplomáticas (embajadas). No se cruzan fronteras, sino que se pide ayuda a las embajadas de otros países, situadas dichas embajadas dentro de su propio país.

En el caso presente si se cruzan fronteras ya que las solicitudes de asilo se presentan en el Estado español. El asilo territorial se define como la protección territorial que un Estado presta en su territorio a personas perseguidas por razones de conciencia ideológica o políticas²³.

Para el Estado de concesión de asilo es un derecho derivado de su soberanía territorial, para el particular asilado no aparece como un derecho, sino como una concesión graciosa del Estado asilante. Para el individuo, aunque no esté configurado como un derecho personal, la tendencia es a encuadrarlo en la categoría de un verdadero derecho humano. Ello se advierte claramente en el preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas de referencia, en la que se recuerdan expresamente los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice:

²³ Artículo 51 de la Convención de Ginebra de 1951.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

“En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país”²⁴.

El asilo va unido a la idea de protección otorgada a una persona cuya vida o seguridad peligra, en un lugar al cual sus perseguidores no tienen acceso. La propia constitución española, aunque remitiendo su regulación a la Ley, afirma en su artículo 13.4, que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Hay una inexistencia de norma alguna de Derecho internacional que imponga a los Estados la obligación de otorgar asilo, pero sí existe en la práctica internacional generalizada según la cual, los Estados, en el ejercicio de su soberanía, asilan a quienes sufren injusta persecución por causa, por ejemplo, de su raza, su religión, su nacionalidad u otras circunstancias unidas a su persona.

El asilo territorial tiene su fundamento en la competencia plena y exclusiva que ejerce el Estado sobre su territorio; por eso el Estado tiene un derecho indubitado a otorgar asilo en su territorio a quien desee y por los motivos que le parezcan justificados. Pudiendo asilar, por supuesto, más allá de las obligaciones internacionales convencionales que dicho Estado, en su caso, hubiera contraído, las cuáles funcionarán sólo como mínimo. Esto es, un Estado que haya ratificado la Convención de Ginebra, puede darse una ley nacional de asilo más generosa que dicho tratado, pero nunca podrá contravenir las disposiciones del mismo que no haya sometido a reserva.

El asilo, en principio, no tiene porqué quedar circunscrito a un tipo de personas determinado, sino que, como facultad estatal, se otorgará a quien el Estado soberano encuentre susceptible de tal amparo. Tampoco es necesario que el solicitante de asilo huya de la persecución a la que le somete el Estado de su nacionalidad, sino que basta que dicho Estado no quiera o no pueda protegerle.

Diez De Velasco define el derecho de asilo como la protección que un Estado ofrece a personas que no son nacionales suyos y cuya vida o libertad están en peligro por actos, amenazas y persecuciones de las autoridades de otro Estado, o incluso por personas o multitudes que hayan escapado al control de dichas autoridades. Así también opina que aún no siendo, el derecho de asilo, un derecho personal, hay tendencia a encuadrarlo dentro de los derechos humanos.

La Declaración de la Asamblea General de 1967 resumió en 6 principios elementales en cuanto a materia de asilo se refiere:

- Que el otorgamiento del asilo es un acto pacífico y humanitario y no debería ser considerado como inamistoso.
- Que es el Estado que asila quien aprecia la validez de los motivos invocados.
- Que el asilo no será otorgado en caso de crímenes de guerra o crímenes contra la paz o la humanidad²⁵

²⁴ Artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

²⁵ Artículo 1.f de la convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados, artículo 8.2.a de la ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria y artículo 11.1.a de la misma ley.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

- Que la solidaridad internacional debe intervenir para aliviar las cargas de los Estados cuando el otorgamiento del asilo les suponga serias dificultades.
- Que una persona que solicita asilo no puede ser objeto de rechazo en frontera ni puede ser devuelto o expulsado a un Estado donde corra peligro de ser perseguido de nuevo.
- Que las personas asiladas no pueden realizar actividades contrarias a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

3. Análisis sobre la solicitud de asilo de los tripulantes de Dinamarca, Perú y Filipinas.

Según los artículos 2 y 16.1 de la ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de protección subsidiaria, el derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas.

Los 4 ciudadanos de Dinamarca que solicitan el asilo territorial en el Estado español tienen acreditada su nacionalidad pues portaban (al contrario que el resto de la tripulación a excepción de los nacionales españoles), en el momento de la detención por las autoridades españolas, la documentación que les acreditaba como ciudadanos de dicho país. Lo cual implica que no cumplirían el requisito indispensable señalado en el artículo 2 ya que no son ni apátridas pues sí tienen nacionalidad de Dinamarca y tampoco son ciudadanos no comunitarios pues Dinamarca forma parte de la Unión Europea.

Así también en el artículo 20.d de la misma ley señala que no será admitida a trámite la solicitud cuando la persona solicitante proceda de un tercer país seguro, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo y, en su caso con la lista que sea elaborada por la Unión Europea, donde, atendiendo a sus circunstancias particulares:

“reciba un trato en el que su vida, su integridad, y su libertad no estén amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social u opinión política, se respete el principio de no devolución, así como la prohibición de expulsión en caso de violación del derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, exista la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, a recibir protección con arreglo a la convención de Ginebra; siempre que el solicitante sea readmitido en ese país y existan vínculos por los cuales sería razonable que el solicitante fuera a ese país. Para la aplicación del concepto de tercer país seguro, también podrá requerirse la existencia de una relación entre solicitante de asilo y el tercer país de que se trate por la que sería razonable que el solicitante fuera a ese país”.

Además el artículo 20.f indica que también será denegada la solicitud, cuando la persona solicitante sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo al Tratado Constitutivo de la Comunidad

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

Europea sobre el derecho de asilo a nacionales de Estados miembros de la Unión Europea.

Los nacionales de Perú y los nacionales de Filipinas solicitan asilo al Estado español alegando haber sido víctimas de una trama de tráfico ilícito de migrantes al igual que los cuatro ciudadanos de Dinamarca.

La Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional tiene como finalidad la protección de la trata de mujeres y niños, la lucha contra la fabricación y tráfico de armas de fuego así como el tráfico y transporte ilícito de migrantes incluso por mar. Este último de los casos es el que tenemos que entrar a valorar.

El Estado español ratificó el Convenio de Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional así como sus protocolos, incluido entre ellos el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes a fecha de 13 de febrero de 2002. Con lo que siguiendo el artículo 10.2 de la Constitución española²⁶ pasa el Convenio y el citado Protocolo a formar parte de la legislación española:

“las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

El tráfico ilícito de migrantes, según el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, se entenderá como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material²⁷.

En el artículo 5 se señala que los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al presente Protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

²⁶ STC 64/91 de 22 de Marzo, fundamento jurídico 4: “la interpretación a que alude el citado artículo 10.2, no convierte a tales tratados y acuerdos internacionales en canon autónomo de validez de las normas y actos de los poderes públicos desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Si así fuera, sobraría la proclamación constitucional de tales derechos, bastando con que el constituyente hubiera efectuado una remisión a las declaraciones internacionales de derechos humanos o, en general, a los tratados que suscriba el estado español sobre derechos fundamentales y libertades públicas. Por el contrario, realizaba la mencionada proclamación, no puede haber duda de que la validez de las disposiciones y actos impugnados en amparo debe medirse sólo por referencia a los preceptos constitucionales que reconocen los derechos y libertades susceptibles de protección en esta clase de litigios. Siendo los textos y acuerdos internacionales del artículo 10.2 una fuente interpretativa que contribuye a la mejor identificación del contenido de los derechos cuya cautela se pide a este TC”.

²⁷ Artículo 3.a del protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

Así en el artículo 6.1.a se indica como conducta el tráfico ilícito de migrantes, con lo que los nacionales de Perú, Filipinas y Dinamarca estarían excluidos de responsabilidad.

En este caso no estaríamos hablando de la posibilidad de que el Estado español asilara a los nacionales de Perú, Filipinas y Dinamarca sino que los propios Estados de origen de ambos tendrían que repatriarlos. Así lo dice el artículo 18.1 del citado protocolo:

“Cada Estado Parte conviene en facilitar y aceptar, sin demora indebida o injustificada, la repatriación de toda persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que sea nacional de ese Estado Parte o tuviese derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de la repatriación”.

El mismo artículo pero en su párrafo 3, señala que todo Estado parte requerido verificará si una persona que ha sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 es nacional de ese Estado parte, recordemos que tanto los que dicen ser nacionales de Perú como los que dicen ser nacionales de Filipinas viajaban en el buque “Pobre Mitrofán” sin documentación, no así los nacionales de Dinamarca que sí llevaban la documentación que les acreditaba como ciudadanos de dicho Estado.

El artículo 18.4 indica que con el fin de facilitar la repatriación que aquellos que han sido parte de un delito de tráfico ilícito de migrantes, el Estado parte del que esa persona sea nacional deberá expedir, previa solicitud el Estado parte receptor, en este caso España, los documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean necesarios para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él.

4. Conclusión de la solicitud de asilo de los tripulantes de Dinamarca, Perú y Filipinas.

Después de explicar todo lo anterior, llegamos a la conclusión de que tanto los nacionales de Dinamarca como lo que dicen ser nacionales de Perú y Filipinas deberán ser repatriados a sus Estados de origen y no concedérseles el asilo que solicitaban.

Al comenzar con el análisis relativo de la concesión o denegación del asilo, explicaba que en el caso de los nacionales de Dinamarca no cumplían los requisitos para ser asilados por el Estado español ya que ni eran apátridas, ni nacionales no comunitarios y ni mucho menos eran perseguidos por razones de ideología, raza, color etc y por tanto deberían ser repatriados. Pero aunque hubiesen cumplido los requisitos, tampoco podrían haber adquirido tal condición de asilado pues argumentaron con su petición el haber sido víctimas de tráfico ilícito de migrantes.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

El protocolo de Naciones Unidas manifiesta que en estos casos no se hablaría de derecho de asilo sino de repatriación, pues ni los nacionales de Dinamarca, ni de Perú ni de Filipinas huyen de su país por algunos de los motivos regulados en la ley 12/2009 tales como persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas etc²⁸ sino que intentaron entrar ilegalmente en España con ayuda de alguna organización transnacional ilegal. Por lo que en ningún caso les será concedido el asilo y tendrán que ser repatriados en las condiciones citadas anteriormente.

Todos los tripulantes del buque reconocieron ser víctimas de tráfico ilícito de migrantes con lo que podemos entender que colaboraron con las autoridades españolas contra redes organizadas.

Esto marca una excepción al protocolo contra el tráfico ilícito, sí bien el mismo nos ordena extraditar a las víctimas de tráfico ilícito siempre que no sean perseguidos en su país, la Ley de extranjería 4/2000 en su artículo 59 nos dice lo siguiente:

“el extranjero que se encuentre irregularmente en España y sea víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral o de tráfico ilícito de mano de obra o de explotación en la prostitución abusando de su situación de necesidad, podrá quedar exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia a los autores o cooperadores de dicho tráfico, o coopera y colabora con las autoridades competentes, proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el proceso correspondiente contra aquellos autores”.

A los extranjeros que hayan quedado exentos de responsabilidad administrativa se les podrá facilitar, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, y facilidades para su integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley velando, en su caso, por su seguridad y protección²⁹.

También hablaré más adelante sobre el tema de la trata de seres humanos para la explotación laboral, pero se debe hacer un inciso aquí, ya que los instrumentos internacionales reconocen, bien a través de cláusulas de salvaguardia, bien de forma expresa, que las víctimas de trata pueden ser refugiadas o asiladas. No obstante, se considera que sería más probable la concesión del estatuto del refugiado o asilado en los supuestos de trata con fines de explotación sexual y menos en supuestos de trata laboral, ya que el temor a una persecución una vez retornados al país de origen no parece ajustarse a la realidad en la mayoría de los casos de trata laboral.

²⁸ Artículo 7 de la Ley 12/2009.

²⁹ Artículo 59.3 de la Ley 4/2000.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

5. La mutilación genital.

En el último de los casos, La señora Amina y el señor Thomas solicitan el asilo para ellos y sus dos hijas menores, Laina y Alima, alegando haber huido de su país por temor de que sus hijas sufriesen la mutilación genital en su pueblo natal.

La mutilación genital femenina en España es un delito tipificado en el código penal, viene recogido en el artículo 149:

“149.1 el que causare a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica, será castigado con la pena de prisión de seis a doce años”.

En el año 2003, la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, modificó el artículo 149 del código penal, tipificando el delito de mutilación genital o ablación. Así en su exposición de motivos señalaba lo siguiente:

“(...) la reforma se plantea desde el reconocimiento de que con la integración social de los extranjeros en España aparecen nuevas realidades a las que el ordenamiento debe dar adecuada respuesta (...) la mutilación genital de mujeres y niñas es una práctica que debe combatirse con la máxima firmeza, sin que pueda en absoluto justificarse por razones pretendidamente religiosas o culturales (...)”.

6. Análisis y conclusión de la solicitud de asilo de los tripulantes de Burkina-Faso.

Sí bien ellos también formarían parte de esa trama de tráfico ilícito de migrantes, sus circunstancias personales son distintas a los otros tripulantes del buque “Pobre Mitrofán”.

Tanto Anima como su esposo e hijas cumplirían los requisitos básicos de los artículos 2 y 16.1 de la ley antes mencionada, ya que provienen de Burkina-Faso con lo cual serían nacionales no comunitarios, aunque no se encontró documentación que acreditara esto, con lo que podíamos entender que son apátridas y aún así sería válido concederles el asilo en un primer momento.

En el artículo 6 de la ley 12/2009 se citan los actos de persecución por lo que les podrá ser concedido el asilo a quienes lo soliciten. Así en el artículo 6.2 a y f se dice que

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

los actos de persecución definidos en el apartado primero podrán revestir, entre otros, las siguientes formas: a) actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual y f) actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o niños. En el caso presente ambas niñas tendrían derecho a ser asiladas pues huyen para no ser sometidas a la mutilación genital, ya que entendemos que cuando la ley dice “actos de violencia o naturaleza sexual” o “actos de violencia física” perfectamente tendría cabida la circunstancia de la que estamos hablando.

En todo caso les será concedido el asilo en condición de refugiado. El artículo 3 de la Ley 12/2009 señala que le será concedido la condición de refugiado a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país³⁰.

7. La agrupación familiar.

Así pues a primera vista parece que únicamente tienen derecho a ser asiladas por el Estado español Laina y Alima, así no sus padres pues no concurre ninguna de las circunstancias que señala la ley para que el Estado los convierta en asilados.

Sí bien el artículo 9.1 de la Convención de derechos del niño con entrada en vigor el 2 de septiembre del año 1990 nos dice que “*Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos*”.

También el artículo 10.1 señala:

“De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares”.

El artículo 11 de la convención de derechos del niño nos indica que “*Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero*”.

Si seguimos analizando este tema, la ley 12/2009 también contempla la posibilidad de que los padres pueden quedarse en España con sus hijas en la situación

³⁰ Artículo 1.a 2) de la Convención de Ginebra de 1951.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

de asilo. Esto aparece señalado en el título III de la ley “de la unidad familiar de las personas beneficiarias de protección internacional”.

El artículo 39.1 indica que se garantizará el mantenimiento de la familia de las personas refugiadas y beneficiarias de la protección subsidiaria. Y continua explicando en el artículo 39.2 que durante la tramitación de una solicitud de protección internacional, los miembros de la familia de la persona interesada a los que se hace referencia en el artículo 40 se encontrasen en España, y no hubiesen presentado una solicitud independiente de protección internacional, se les autorizará la residencia en España con carácter provisional, condicionada a la resolución de la solicitud de protección internacional. Este es el caso presente, ya que tanto el matrimonio como sus hijas menores presentan solicitud conjunta, con lo cual les será aceptada la residencia también a los padres a espera de la resolución definitiva de asilo.

El restablecimiento de la unidad familiar de las personas en situación de protección internacional podrá garantizarse mediante la concesión, respectivamente, del derecho de asilo, a sus ascendientes y descendientes en primer grado, salvo en los supuestos de independencia familiar, mayoría de edad y distinta nacionalidad³¹. En el caso de Laina y Alima tendrían derecho al restablecimiento de la unidad familiar de sus ascendientes en primer grado, es decir, sus padres, la señora Amina y el señor Thomas.

En el artículo 41.2 sobre reagrupación familiar se indica que no se exigirá a los refugiados o beneficiarios de la protección subsidiaria, ni tampoco a los beneficiarios de la reagrupación familiar, los requisitos establecidos en la normativa vigente de extranjería e inmigración. Así en el artículo 41.3 señala que implicará la autorización de residencia y, en su caso, de trabajo, de análoga validez a la de la persona reagrupante.

En lo que se refiere a la reagrupación familiar, además de venir recogida como hemos visto en la Ley 12/ 2009, de 30 de Octubre, reguladora del derecho de asilo y de la Convención de derechos del niño de 1990, también se regula la misma en la Ley 4/2000 de 11 de enero, la llamada Ley de extranjería donde se recogen los derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social.

Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar, así como también tiene derecho a reagrupar con ellos a los familiares que se determinen en el artículo 17 de la misma Ley 4/2000³².

Además y ya para terminar el artículo 46 hace referencia a la especial protección que tendrán las personas solicitantes o beneficiarias de la protección internacional en situación de vulnerabilidad, entendiendo por vulnerabilidad por ejemplo, cuando sea menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que haya padecido torturas, violaciones u otra formas graves de violencia psicológica o física y sexual y víctimas de trata de seres humanos. En el caso a desarrollar se trata de la concesión de asilo a dos menores, con lo cual en situación de vulnerabilidad.

³¹ Artículo 40 de la Ley 12/2009.

³² Artículo 16.1 y 16.2 respectivamente de la Ley 4/2000.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

En el párrafo siguiente, 46.2 expone que dada la situación de especial vulnerabilidad que tienen Laina y Alima, se adoptarán las medidas necesarias para un tratamiento diferenciado, cuando sea preciso.

C. INFORME RAZONADO SOBRE LAS SOLICITUD DE LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

1. Antecedentes.

El señor Thomas y la señora Amina además de solicitar el asilo para ellos y sus dos hijas, también solicitan una prestación familiar de la seguridad social por hijos menores de edad a cargo y la prestación por desempleo, entendiendo por esta última el subsidio por desempleo y no la prestación por desempleo. Esta diferencia es importante ya que cuando nos referimos a prestación por desempleo estamos hablando de una prestación contributiva que exige una previa cotización a la seguridad social y el subsidio por desempleo es una prestación no contributiva.

2. Consideraciones jurídicas sobre los derechos de los extranjeros.

En lo referente a los solicitantes de asilo, Amina y Thomas quedan fuera de los derechos fundamentales de los extranjeros comunitarios que, por su pertenencia a la Unión Europea, tienen una posición de privilegio si se les compara con aquellos, puesto que son extranjeros no comunitarios ya que dicen proceder de Burkina-Faso, con lo que mientras dura su tramitación y hasta que no se resuelva de manera positiva la solicitud de asilo no se les puede considerar como personas que se hallan dentro de España dispuestos a prestar servicios de naturaleza laboral y con derechos de recibir prestaciones no contributivas, como es la prestación de la seguridad social por hijos menores de edad a cargo como el subsidio por desempleo.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

El artículo 13.1 de la Constitución Española³³ prevé que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establecen los Tratados y la ley. Disponiendo el número segundo una reserva a favor solamente de los españoles respecto de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo criterios de reciprocidad, para el derecho de sufragio activo y pasivo de las elecciones municipales. Es decir, salvo esta restricción, parece que puede afirmarse una equiparación entre los derechos de los nacionales y los que corresponden a los extranjeros.

El Tribunal Constitucional ha venido estableciendo algunos pronunciamientos³⁴, el primero de ellos sobre el artículo 13.1, el cual no significa que los extranjeros gocen sólo de aquellos derechos y libertades que establecen los tratados y las leyes. Significa que el disfrute por los extranjeros de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la CE podrá atemperarse en cuanto a su contenido a lo que determinan los tratados internacionales y la ley española. Pero ni siquiera esta atemperación es posible en relación con todos los derechos, pues existen algunos que corresponden por igual a españoles y extranjeros, ya que pertenecen a la persona humana en cuanto tal.

Y la segunda de dichas resoluciones razona que el problema de la titularidad y ejercicio de los derechos dependerá del derecho afectado. Existen derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos; existen derechos que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros, como por ejemplo el artículo 23 de la CE³⁵; y existen otros que, pertenecerán o no a los extranjeros, según lo dispongan los tratados y las leyes, siendo entonces admisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio.

En definitiva la inexistencia de declaración constitucional que proclama la igualdad de los extranjeros y españoles no es, sin embargo argumento bastante para considerar resuelto el problema, estimando que la desigualdad de trato entre extranjeros y españoles resulta constitucionalmente admisible, o incluso que el propio

³³ STC 107/84 de 23 de Noviembre, fundamento jurídico 3: “a tenor del artículo 13 de la Constitución., los extranjeros gozarán en España..., Ello supone que el disfrute de los derechos y libertades reconocidos en el título I de la CE se efectuará en la medida en que lo determinen los tratados internacionales y la ley interna española, y de conformidad con las condiciones y el contenido previsto en tales normas, de modo que la igualdad o desigualdad en la titularidad y ejercicio de tales derechos y libertades dependerá, por propia previsión constitucional, de la libre voluntad del Tratado o la Ley”.

³⁴ La Sentencia del Tribunal Constitucional 53/2002, de 27 de febrero, establece que: “el tiempo en el que el solicitante de asilo permanece en dependencias adecuadas del puesto fronterizo, rigen, por principio, los derechos fundamentales derivados de la dignidad de la persona que la Constitución reconoce a todas las personas sometidas a los poderes públicos españoles”.

³⁵ STC 107/ 84, de 23 de Noviembre, fundamento jurídico 4: “el problema de la titularidad y ejercicio de los derechos y, más en concreto, el problema de la igualdad en el ejercicio de los derechos, que es el tema aquí planteado, depende, pues, del derecho afectado. Existen derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos; existen derechos que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros, los reconocidos en el artículo 23 de la Constitución, según dispone el artículo 13.2 y con la salvedad que contienen; existen otros que pertenecerán a los extranjeros según lo dispongan los Tratados y Leyes, siendo entonces admisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio”.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

planteamiento de una cuestión de igualdad entre extranjeros y españoles está constitucionalmente excluido.

Así también volviendo al artículo 10.2 de la CE:

“las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

En el ámbito del Derecho español interno y en referencia específica al Derecho de extranjería también se establecen límites; así el artículo 3.2 LO 4/2000 señala que:

“las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias vigentes en España”.

Los extranjeros por tanto tendrán no solo derecho al trabajo sino derecho también a la seguridad social. Así lo recoge la LO 4/2000 que reconoce el derecho a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social a los residentes extranjeros en las mismas condiciones que los nacionales, y a todos los extranjeros (independientemente de su situación administrativa) las prestaciones sociales básicas.

3. Análisis y conclusión sobre la prestación de hijos menores a cargo.

La LO 4/2000 dispone en su artículo 14.1, que todos los extranjeros residentes en nuestro país tendrán derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles. En cumplimiento de este artículo, al no hacer ninguna distinción entre la Seguridad Social contributiva y la no contributiva, desde febrero de 2000 en que entró en vigor, todos los extranjeros, cualquiera que sea su nacionalidad, que residan legalmente en España y cumplan el resto de los requisitos normativamente previstos tendrán derecho al nivel contributivo, en igualdad de condiciones que los españoles.

La modalidad no contributiva de nuestro sistema, en rigor, se refiere fundamentalmente, como se deduce del artículo 38 de la Ley General de Seguridad Social de 1994, a las prestaciones económicas familiares contempladas en la sección 2º del capítulo IX, título II, de la misma norma, en la redacción dada por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre y, sobre todo, como se dijo, a las de invalidez permanente y jubilación.

Sin perjuicio de que, por su carácter universal y por la expresa previsión del artículo 12 de la LO 4/2000, afecte también a la asistencia sanitaria de todos los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en que

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

residan habitualmente, a los menores de 18 años en cualquier circunstancia, a las embarazadas durante el embarazo etc., así como a la asistencia pública de urgencia, hasta el alta médica, por enfermedades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, incluso sin inscripción padronal igualmente, así como, por su conceptualización complementaria, a los servicios y asistencias sociales. Además, los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a las denominadas prestaciones sociales básicas.

En la ley antes citada para el tema de asilo, la ley 12/2009, también se reconoce en su artículo 17.e que los solicitantes de asilo tendrán derechos y prestaciones sociales a los que tiene acceso en su condición de solicitante de protección internacional.

Así también en el artículo 18 señala que los solicitantes de asilo entre otras cosas tendrá derecho a recibir prestaciones sociales específicas en los términos que se recogen en la Ley.

Ya por último en su artículo 30 indica que se proporcionará a las personas solicitantes de protección internacional, siempre que carezcan de recursos económicos, los servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad, sin perjuicio, en tanto que extranjeros, de los establecido en la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en su normativa de desarrollo.

Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva³⁶, consistirán en una asignación económica por cada hijo, menor de 18 años o, cuando siendo mayor de dicha edad, esté afectado por una discapacidad, en un grado igual o superior al 65 por 100, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación de aquéllos, así como por los menores acogidos, en acogimiento familiar, permanente o pre adoptivo³⁷.

Así pues haciendo referencia al artículo 182 de la ley general de la seguridad social, serán beneficiarios de la asignación económica por hijo o menores a cargo quienes:

- Residan legalmente en territorio español.
- Tengan a su cargo hijos o menores acogidos en quienes concurren las circunstancias señaladas en el párrafo a) del artículo anterior, y que residan en territorio español. Las circunstancias señaladas en el párrafo a del artículo 181 son las de hijo menor de 18 años o mayor de edad y afectado por una discapacidad del 65% o superior a cargo del beneficiario.
- No perciban ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a 11.490,43 euros. La cuantía anterior se incrementará en un 15 por 100 por cada hijo o menor acogido a cargo, a partir del segundo, éste incluido.

³⁶ Véase formulario en ANEXO II.

³⁷ Artículo 181.a de la Ley General de la Seguridad Social.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

- No tengan derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social.

El señor Thomas y la señora Amina cumple pues todos los requisitos necesarios para poder acceder a dicha prestación, con lo que siguiendo el artículo 182 bis de la misma ley tendrán derecho a la cuantía en cómputo anual de 291 euros por cada hija a cargo.

En el artículo 189.1 de la Ley General de la Seguridad Social se nombran las incompatibilidades. En el supuesto de que en el padre y la madre concurran las circunstancias necesarias para tener la condición de beneficiarios de las prestaciones reguladas en la presente sección, el derecho a percibirla sólo podrá ser reconocido en favor de uno de ellos.

4. Análisis y conclusión sobre la prestación por desempleo.

Si bien el señor Thomas y la señora Amina tendrían derecho a la prestación solicitada por hijos menores de edad a cargo, no podemos decir lo mismo en cuanto se refiere a la prestación por desempleo que como señalamos antes, entendiendo por esta el subsidio por desempleo y no así la prestación contributiva para la cual es necesaria la contribución previa a la seguridad social.

Las prestaciones del nivel asistencial por desempleo pueden llegar a reconocerse a extranjeros no comunitarios cuya situación en España no sea del todo regular, pero no son, en puridad, prestaciones no contributivas porque, en mayor o menor medida, suelen estar vinculadas a la necesidad de tener cubiertos determinados períodos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social.

Tendrán derecho a la prestación por desempleo los trabajadores que, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo de forma temporal o definitiva, o vean reducida al menos en un tercio su jornada laboral por expediente de regulación de empleo con pérdida proporcional de salarios.

Esta situación legal de desempleo se produce por despido colectivo, extinción del contrato por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, despido, extinción por causas objetivas, declaración de IP total para la profesión habitual, extinción por no superación del período de prueba de contrato, finalización de un contrato temporal, extinción voluntaria del trabajador por traslado de centro de trabajo, extinción voluntaria del trabajador por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, resolución judicial a instancia del trabajador por causa justa, suspensión de la relación laboral, reducción de un tercio de la jornada, retorno a España de trabajadores a los que se les extinga su relación laboral en el extranjero, liberación de prisión y períodos de la inactividad de los trabajadores fijos-discontinuos.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

Esta prestación por desempleo se solicita ante la oficina de empleo (INEM) o, en los casos de competencias transferidas, de la comunidad autónoma correspondiente, y la paga directamente la entidad gestora.

Ni Amina ni Thomas se han encontrado en ninguna de las situaciones anteriores para poder obtener la prestación por desempleo.

Para tener derecho a esta prestación por desempleo deben cumplirse al menos los siguientes requisitos:

- Haber cotizado a la seguridad social durante un período de al menos doce meses. No es necesario haber trabajado doce meses seguidos, sino doce meses en total durante los seis años anteriores al momento de perder el empleo;
- Estar afiliado y en situación de alta o asimilada al alta en la seguridad social en un régimen que contemple la contingencia por desempleo y encontrarse en situación legal de desempleo;
- Acreditar disponibilidad para buscar trabajo activamente y para aceptar una colocación adecuada.

Amina y Thomas solo podría acceder en todo caso al subsidio por desempleo. Se trata de una prestación no contributiva de carácter asistencial, para aquellas personas que se hallen en alguno de los siguientes supuestos: trabajadores que han agotado la prestación contributiva por desempleo y tienen responsabilidades familiares, trabajadores mayores de 45 años que han agotado prestación por desempleo de al menos 12 meses y que no tienen responsabilidades familiares, trabajadores emigrantes retornados, trabajadores que, al producirse la situación legal de desempleo, no han cubierto el período mínimo de cotización para acceder a la prestación contributiva, liberados de prisión, trabajadores que sean declarados capaces o incapaces parciales, como consecuencia de expediente de revisión por mejoría de una situación de gran invalidez, IP absoluta o total, trabajadores mayores de 45 años que hayan agotado prestación por desempleo de 24 meses y mayores de 52 años.

Con lo que al no encontrarse en ninguna de estas situaciones, Amina y Thomas no tendrán derecho ni a la prestación por desempleo ni al subsidio del mismo por no cumplir los requisitos necesarios explicados anteriormente.

Con todo esto podemos hablar de la inexistencia de una total asimilación entre nacionales y extranjeros. La total asimilación en la materia entre nacionales y extranjeros no existe, ya que hay determinados derechos de los que tradicionalmente se excluye a los extranjeros. Los extranjeros no disfrutaban generalmente de los derechos llamados políticos, es decir, el derecho de voto y a ocupar cargos públicos. Segundo tampoco disfrutaban del derecho de desempeñar determinadas profesiones y tercero, están excluidos del goce de determinados derechos sociales, como el desempleo y la asistencia médica gratuita, excepto en los casos antes señalados, salvo que éstos tengan derecho por su condición de trabajador o haya sido contribuido en pie de igualdad a sufragarlos con los trabajadores nacionales.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

5. RISGA.

Sí bien tendrá derecho a percibir la renta de integración social de Galicia, denominada RISGA³⁸, se trata de una prestación pública destinada a garantizar recursos económicos de subsistencia a quien carezca de ellos, así como a alcanzar progresivamente su autonomía e integración social y laboral, mediante el derecho y el deber de participar en procesos personalizados de inserción con apoyo técnico y financiero del sistema gallego de servicios sociales y del sistema público de empleo de Galicia.

Los requisitos de acceso viene regulados en la Ley gallega 10/2003³⁹, de 27 de Noviembre, de inclusión social, así también en la Ley 9/1991, de 2 de Octubre, de medidas básicas para la inserción social⁴⁰, y son los siguientes: tener residencia efectiva y constatada por los servicios sociales comunitarios responsables de desarrollar las acciones que se diseñen en el correspondiente proyecto de integración social y estar empadronado o empadronada en cualquiera de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Gallega, por lo menos durante los seis meses anteriores a la prestación de la solicitud de valoración. Se computarán a estos afectos los períodos de empadronamiento sucesivo en distintos ayuntamientos gallegos.

Así también, tener residencia legal, tener más de 25 años, disponer en la unidad de convivencia de ingresos inferiores al importe del tramo personal y familiar que le correspondería y, además, no disponer de bienes patrimoniales de los que se deduzca la existencia de medios suficientes para la subsistencia y por último que no existan personas legalmente obligadas y con posibilidad real de que les presten alimentos de acuerdo con la legislación civil.

Queda exceptuado del requisito de la residencia legal quien tenga reconocida la condición de persona refugiada por el organismo competente de la Administración general del Estado, o aquellas personas cuya solicitud de asilo se hubiese admitido a trámite o, no habiéndose admitido, tengan los o las solicitantes autorizada su permanencia en España por razones humanitarias o de interés social, en el marco de la legislación del derecho de asilo, de la condición de persona refugiada y de la normativa reguladora de los derechos y libertades de las personas extranjeras en España y de su integración social⁴¹.

³⁸ Véase formulario en ANEXO III.

³⁹ Artículo 12 de la Ley 10/2003, de 27 de Noviembre, de inclusión social.

⁴⁰ Modificada por la Ley 1/1999, de 5 de Febrero y posteriormente modificada por la Ley 16/2004, de 29 de Diciembre.

⁴¹ Artículo 14 de la Ley 10/2003, de 27 de Noviembre, de Inclusión social.

D. INFORME RAZONADO SOBRE EL ACTA DE INFRACCIONES LABORALES.

1. Antecedentes.

Cuando las autoridades españolas interceptan el buque “Pobre Mitrofán” además de corroborar que se estaban realizando actividades de contrabando (ya que recordemos que las autoridades españolas lo sospechaban) y que posiblemente se estaba cometiendo un ilícito penal al traficar con migrantes (los tripulantes del buque así lo declaran), también se observa que posiblemente ese trata de personas venía dada por una relación laboral ilegal ya que el patrón del barco declara que todos los detenidos son miembros de la tripulación del buque y reconoce que realizaban distintas labores a bordo del mismo.

2. Consideraciones jurídicas sobre el acta de infracción laboral.

La inspección de trabajo y Seguridad Social que se realiza a bordo del buque es completamente legal ya que se cumplen todos los requisitos y en ningún momento tendría que haber sido preavisada.

Se entiende que las visitas no se preavisan, habiendo tenido en una ocasión que declarar ilegal una inspección de trabajo⁴², a instancia de la organización sindical Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, ya que existe un precepto reglamentario relativo a las actuaciones inspectoras de trabajo que indica que no serán preavisadas salvo que estemos hablando de centros o dependencias de la Administración pública en las que se preavisará a quien se encuentre al frente del centro a inspeccionar.

Cuando un funcionario actuante ha comprobado que un empresario ha cometido una infracción extenderá el acta de infracción. La extensión de la misma da lugar al inicio del procedimiento sancionador.

Es importante saber que un acta de infracción no es más que una propuesta de sanción, que será confirmada por la autoridad competente para resolver, por lo tanto, la inspección sólo propone sanción, no la impone. Contra esta propuesta de sanción siempre se pueden interponer alegaciones.

⁴² Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2003 (Aranzadi WESTLAW, referencia RJ 2003/2262).

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

Tanto la actuación previa a la extensión del acta de infracción o liquidación, como todo lo que ocurre una vez que las actas han sido notificadas al empresario infractor está regulado en el Real Decreto 928/98, de 14 de Mayo y la Ley reguladora de la Inspección de Trabajo, Ley 42/97, de 14 de Noviembre, donde se definen las funciones, competencias y ámbitos de actuación de la propia inspección.

La ley reguladora de la inspección de trabajo define en su artículo 1.2 la inspección de trabajo y seguridad social como un servicio público al que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social y exigir las responsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento y, en su caso, arbitraje, mediación y conciliación en dichas materias, que efectuará de conformidad con los principios del Estado social y democrático de Derecho que consagra la Constitución Española, y con los Convenios números 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo.

El artículo 13.1 del Real Decreto 928/98 señala que el procedimiento sancionador se iniciará de oficio, como resultado de la actividad inspectora previa, por acta de infracción de la inspección de trabajo y seguridad social.

Las actas de infracción laboral de la inspección de trabajo y seguridad social deberán reflejar lo siguiente, según el artículo 14 del Real Decreto:

- Nombre y apellidos o razón social, domicilio, actividad, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, código de cuenta de cotización a la Seguridad Social y, en su caso, número de Seguridad Social de autónomos, del presunto sujeto infractor.
- Los hechos comprobados por el funcionario actuante.
- La infracción o infracciones presuntamente cometidas, con expresión del precepto o preceptos vulnerados, y su calificación.
- Número de trabajadores de la empresa y número de trabajadores afectados por la infracción, cuando tal requisito sirva para graduar la sanción o, en su caso, calificar la infracción.
- La propuesta de sanción, su graduación y cuantificación, que será el total de las sanciones propuestas si se denunciará más de una infracción.
- Órgano competente para resolver y órgano competente para realizar los actos de instrucción y ordenación del expediente sancionador y plazo para la interposición de las alegaciones ante éste.
- Indicación del funcionario que levanta el acta de infracción y firma del mismo y, en su caso, visado del Inspector de Trabajo y Seguridad Social con su firma e indicación del que la efectúe.
- Fecha del acta de infracción.

Las actas de infracción laboral tienen naturaleza de documentos públicos. Las actas formalizadas con arreglo a los requisitos establecidos estarán dotadas de presunción de certeza de los hechos y circunstancias reflejados en la misma que hayan sido constatados por el funcionario actuante, salvo prueba en contrario, de conformidad

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

con lo establecido en la disposición adicional cuarta.2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social⁴³.

Lo que establece la disposición adicional cuarto en su punto dos de la Ley 42/1997 es que los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación observando los requisitos legales pertinentes tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados.

3. Análisis sobre el acta de infracción laboral.

A la empresa “Conservas y congelados Sousa-Holstein S.A” se le levanta un acta de infracción laboral por tener a 18 trabajadores (seis nacionales españoles, cuatro de Dinamarca, cuatro de Burkina Faso, dos de Perú y dos de Filipinas) sin contrato de trabajo realizando labores en el buque “Pobre Mitrofán”. El patrón del barco, el señor Gutiérrez, reconoce que dichos tripulantes efectivamente realizaban labores en el barco y que todos ellos carecían de contrato de trabajo.

Y no solo no estaban dados de alta en la seguridad social y carecían de contrato de trabajo sino que si vamos más allá estos estaban privados también, a excepción de los españoles que eran nacionales del pabellón de buque, de permiso de trabajo ya que no tenía la residencia legal en el Estado español.

El estatuto de los trabajadores, en su artículo 230 señala las obligaciones por parte de la empresa respecto de sus empleados, algunas de ellas son por ejemplo cotizar por la aportación empresarial a la contingencia por desempleo, ingresar las aportaciones propias y las de sus trabajadores en su totalidad, siendo responsables del cumplimiento de la obligación de cotización, proporcionar la documentación e información que reglamentariamente se determine a efectos de reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación del derecho a las prestaciones, entregar al trabajador el certificado de empresa, en el tiempo y forma que reglamentariamente se determinen, abonar a la entidad gestora competente las prestaciones satisfechas por ésta a los trabajadores cuando la empresa hubiese sido declarada responsable de la prestación por haber cumplido sus obligaciones en materia de filiación, alta o cotización y por último proceder, en su caso, al pago delegado de las prestaciones por desempleo. Obligaciones las cuales no se cumplieron.

Los tripulantes de Burkina-Faso, el señor Thomas y la señora Amina viajaban a bordo del buque “Pobre Mitrofán” con sus dos hijas menores de edad de las que entendemos que también realizaban labores a bordo (ya que el patrón del buque “Pobre Mitrofán” señaló que todos eran tripulantes del marco sin excepción) y tampoco tenía contrato de trabajo ni permiso de trabajo en España.

⁴³ Artículo 15 del Real Decreto 928/98, de 14 de Mayo.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

En el caso a resolver no se especifica la edad ni de Laina ni de Alima. Si fueran menores de 16 años no tendría permiso de trabajo así lo recoge el estatuto de los trabajadores en su artículo 6.1 cuando dice:

“Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años”.

Sin embargo si fueron menores de edad pero mayores de 16 años sí podrían trabajar pero bajo ciertas condiciones tales como, no podrían realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, declare insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto para su salud como para su formación profesional y humana. También se les prohíbe realizar horas extraordinarias.

Así también se reconoce en el artículo 32 de la Convención de derechos del niño que los Estados parte reconocerán el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Los Estados parte adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del artículo 32. Con este propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados parte, en particular, fijarán una edad o edades mínimas para trabajar, dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo y estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva⁴⁴.

Recordemos pues que en España como acabamos de comentar la edad mínima para trabajar son los 16 años y el patrón del buque “Pobre Mitrofán” reconoció que realizaban labores a bordo del barco.

La Sentencia T.S.J. Murcia 352/2012 de 29 de marzo es un claro ejemplo del caso que nos ocupa sobre el acta de infracción laboral contra la empresa “Conservas y congelados Sousa-Holstein S.A”.

En la sentencia mencionada se levanta un acta de infracción laboral y seguridad social y se le sanciona con una multa por una sanción por infracción de Extranjería.

La empresa ha contratado a trabajadores extranjeros, sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización del trabajo, que debe acreditarse mediante el correspondiente permiso de trabajo, autorización administrativa o los documentos que específicamente se determinen⁴⁵.

⁴⁴ Artículo 32.2 de la Convención de derechos del niño.

⁴⁵ Sentencia T.S.J Murcia 352/2012 de 29 de marzo. Fundamento jurídico 1.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

El artículo 66.3 R.D. 864/2001, de 20 de julio, señala que la autorización para trabajar se acreditará con el correspondiente permiso de trabajo, autorización administrativa o mediante los documentos que específicamente se determinan.

En la sentencia se hace saber que en el momento que se realiza la inspección en el lugar de trabajo estaban presentes el encargado y el administrador de la empresa y que ambos reconocieron personalmente la prestación de servicios por parte de los 18 extranjeros. Esto sucede también en el caso que nos ocupa. El patrón del buque el señor Gutiérrez reconoció también que los 18 tripulantes (sí bien no el administrador de la empresa, el señor Silvestre-Holms), todos extranjeros, menos los 6 españoles realizaban actividades laborales en el barco, sin contrato de trabajo y sin alta en la seguridad social así como sin permiso de trabajo.

El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores señala todos y cada uno de los presupuestos sustantivos que dotan a la relación jurídica examinada del carácter laboral que se apunta, puesto todo ello en relación con el contenido del artículo 8.1 de la misma norma legal.

Así en su artículo 1.1 indica lo siguientes:

“La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”.

Y en el artículo 8.1 señala que:

“El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél”.

4. Responsabilidad y conclusión sobre la infracción laboral.

Tanto en el caso relativo a la sentencia como en el caso que nos ocupa, la representación de la empresa no aporta, en su personación, autorización administrativa previa para trabajar o permiso de trabajo que acredite que se está autorizado para trabajar por cuenta ajena, ni documento identificativo alguno, respecto de ninguno de los trabajadores extranjeros afectados por el acta, por carecerse de tales documentos.

Aunque posteriormente la empresa citada en la sentencia niega el haber reconocido que los extranjeros eran trabajadores de su empresa, ya era demasiado tarde pues como comenté antes las actas formalizadas con arreglo a los requisitos establecidos están dotadas de presunción de certeza de los hechos.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

El Tribunal Supremo declara que la presunción de certeza comprende los hechos comprobados con ocasión de la inspección y reflejados en el acta de infracción, bien porque por su realidad objetiva fueran susceptibles de percepción directa por el inspector en el momento de la visita, o porque hayan sido comprobados documentalment e, y por otras pruebas realizadas

Esto viene reflejado en el contenido exigido por el artículo 14 del Reglamento General de procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, y señala que:

"Las actas extendidas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tienen naturaleza de documentos públicos"; y que:

"las formalizadas con arreglo a los requisitos establecidos en el artículo anterior estarán dotadas de presunción de certeza de los hechos y circunstancias reflejadas en la misma que hayan sido constatados por el funcionario actuante, salvo prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta. 2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social".

Con lo que, no cabe duda de que es correcta la apreciación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de que los hechos expuestos constituyen una infracción administrativa en materia de extranjería, de acuerdo con el artículo 51.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

En el artículo 52 de la LO 4/2000 señala que hechos constituyen pues una infracción administrativa, en el caso que nos ocupa sería el indicado en la letra e del citado artículo:

"la contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa ocupación o ámbito geográfico, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados".

Será considerada por tanto como una infracción muy grave tipificada en el artículo 54.1.d de la LO 4/2000:

"La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre que el hecho no constituya delito".

Según el Real Decreto Legislativo, de 4 de Agosto sobre infracciones y sanciones de orden social señala como conducta constitutiva de infracción muy grave que los empresarios utilicen a extranjeros sin haber obtenido con carácter previo el

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

preceptivo permiso de trabajo, o su renovación, incurriendo en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros que haya ocupado⁴⁶.

Así también se considera una infracción muy grave el transporte de extranjeros por vía aérea, marítima o terrestre, hasta el territorio español, por los sujetos responsables del transporte, sin que hubieran comprobado la validez, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado, de los que habrán de ser titulares los citados extranjeros⁴⁷.

Las infracciones muy graves tienen la multa de 10.001 hasta 100.000 euros, excepto la prevista en el artículo 54.2b), que lo será con una multa de 5000 a 10.000 por cada viajero transportado o con un mínimo de 750.000 euros a tanto alzado, con independencia del número de viajeros transportados.

Ante el acta de infracción laboral, se podrán presentar alegaciones⁴⁸.

5. La trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

En el presente caso la cosa va más allá, pues no estamos solo ante una sanción administrativa como es el hecho de tener trabajadores sin contrato de trabajo, sino que se trata de inmigrantes con los que se está cometiendo un ilícito penal que conlleva la trata de personas con fines de explotación laboral.

En la trata de personas con fines de explotación laboral, las previsiones para la persecución del delito se encuentran en el título XV de los delitos contra los trabajadores de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En materia de tráfico ilegal de mano de obra e inmigración clandestina de trabajadores, existía una laguna a nivel de jurisdicción que se intentó solucionar con el título XV bis de los Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (artículo 318 bis) introducido por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El artículo 318 bis del Código Penal sanciona el “Tráfico ilegal” y no la “trata de personas”. Específicamente, sanciona a quien directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a otro país de la Unión Europea, será castigada con la pena de cuatro a ocho años de prisión.

Se sanciona asimismo a quien realice las conductas anteriores con ánimo de lucro o empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de

⁴⁶ Artículo 37 de la Ley Orgánica 5/2000.

⁴⁷ Artículo 54.2.b Ley Orgánica 4/2000.

⁴⁸ Véase formulario ANEXO I.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

superioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima, o siendo la víctima menor de edad o incapaz o poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas⁴⁹.

Se sancionará en forma agravada, asimismo, cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades, en particular cuando se trata de jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones⁵⁰.

El Tribunal Supremo ha definido la inmigración clandestina como aquella que se realiza dándole una apariencia de legalidad, ocultando a las autoridades la finalidad ilícita con la que se hace y que, en caso de ser reconocida, haría imposible la inmigración. Según el acuerdo del pleno no jurisdiccional de la sala 2ª de 13 de julio de 2005, se considera que constituye delito de inmigración clandestina:

“facilitar un billete de ida y vuelta a extranjeros que carecen de permiso de trabajo y residencia en España, para poder entrar en España como turistas y ponerlos a trabajar”.

En materia de trata de personas con fin de explotación laboral, el legislador ha sancionado conductas asociadas a la trata en los artículos 312 y 313 del Código Penal.

Estos artículos sancionan a quienes trafiquen de manera ilegal con mano de obra⁵¹ y a quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo, ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y a quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual⁵². Se sanciona, asimismo, a quien promoviere o favoreciere por cualquier medio la inmigración clandestina de trabajadores a España simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante, determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país⁵³.

Antes de la importantísima reforma que sufrió el Código Penal en el año 2010 no se hacía referencia a la “trata de personas” sino únicamente al “tráfico”, con lo que había que recurrir a los artículos que acabo de mencionar, sin embargo tras esa reforma se crea el título VII BIS de la trata de seres humanos.

El artículo 177 bis dice lo siguiente:

“1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o

⁴⁹ Artículo 318.bis.2 del Código Penal.

⁵⁰ Artículo 318.bis.4 del Código Penal.

⁵¹ Artículo 312.1 del Código Penal.

⁵² Artículo 312.2 del Código Penal.

⁵³ Artículo 313 del Código Penal.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

extranjera, la captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la alojare con cualquiera de las finalidades siguientes:

- a) La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad.*
- b) La explotación sexual, incluida la pornografía.*
- c) La extracción de sus órganos corporales.”*

Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se considerará trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el apartado anterior cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación⁵⁴. Recordemos que tanto Laina como Alima eran menores de edad y se afirmó que ellas también realizaban labores a bordo del buque “Pobre Mitrofán”.

El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo⁵⁵. Es decir, aunque todos los tripulantes del barco se hubieran comprometido a realizar labores al bordo del buque a cambio de que los trajeran a España, ese consentimiento no tendrá efecto alguno a la hora de sancionar el delito cometido.

La víctima de trata de seres humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado⁵⁶.

E. INFORME RAZONADO SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR “SIVESTRE-HOLMS”.

1. Antecedentes.

Por todo esto, es decir, por el acta de infracción laboral así como por lo referente al posible tráfico ilícito de migrantes (trata de seres humanos para la explotación laboral) y el delito de contrabando de tabaco, se le exige responsabilidad a el señor Silvestre-Holms, en su condición de administrador de la empresa Conservas y Congelados Sousa-Holstein, S.A.

⁵⁴ Artículo 177.2 del Código Penal.

⁵⁵ Artículo 177.3 del Código Penal.

⁵⁶ Artículo 177 bis.11 del Código Penal.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

2. Responsabilidad sobre el tráfico ilícito de migrantes.

El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurren en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre⁵⁷.

En el artículo 31 bis del Código Penal señala que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.

La Ley Orgánica 5/2010 de reforma del Código Penal introduce un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas cuyos fundamentos esenciales se contienen en este artículo 31 bis del Código Penal. Los nuevos sujetos pasivos del proceso penal, potenciales responsables de ilícitos de esa naturaleza, son las personas jurídicas privadas de Derecho Civil y Mercantiles y determinadas personas jurídicas públicas constituyendo la ostentación de personalidad jurídica un requisito imprescindible en todo caso.

En los dos párrafos del apartado 1 de artículo 31 bis del Código Penal se establece un mecanismo vicarial, de modo que las personas jurídicas pueden resultar penalmente responsables de los hechos cometidos por determinadas personas físicas siempre que concurren las específicas condiciones a las que se refiere el precepto aludido.

El objeto del proceso penal en caso de imputación de una persona jurídica no lo constituye la idoneidad objetiva o hipotética del programa de cumplimiento adoptado por la corporación, en su caso, sino que deberá centrarse en acreditar, a través de los medios de prueba con que se cuente en cada caso, que las personas físicas a las que se refieren los dos párrafos del apartado 1 del artículo 31 bis del Código Penal, es decir, representantes, gestores de hecho o de derecho y subordinados en la jerarquía empresarial, cometieron el delito en las concretas circunstancias a las que la Ley se refiere, debiendo atenderse el Ministerio Fiscal a la interpretación que de las mismas se efectúe⁵⁸.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en el artículo 177.3 bis, se le impondrá la

⁵⁷ Artículo 31 del Código Penal.

⁵⁸ Circular 1 /2011, de 1 de junio, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por Ley orgánica número 5/2010.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

pena de multa del triple al quintuple del beneficio obtenido. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

En el artículo 318 bis del Código Penal se hace referencia a los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a otro país de la Unión Europea, será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión.

3. Responsabilidad sobre el delito de contrabando de tabaco.

Eso en lo que se refiere al tráfico ilícito de migrantes, si cambiamos de tercio en cuanto al delito de contrabando no podemos tipificarlo como tal ya que atendiendo al precio medio normal de mercado de las cajetillas de tabaco, no llegaría a la cantidad necesaria, recordemos que en el buque “Pobre Mitrofán” se portaba 2000 cajetillas.

El artículo 2 de la Ley⁵⁹ señala que cometerán delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías o efectos sea igual o superior a 150.000 euros, los que realicen algunos de los siguientes hechos: importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la administración aduanera, realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación etc.

También se cometerá delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos: exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la autorización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito, realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de géneros estancados o prohibidos etc.

Así también cometerán delito de contrabando quienes realicen algunos de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurren algunas de las circunstancias siguientes: cuando el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes etc o cuando se trata de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15.000 euros.

Como se puede observar no estamos ante un delito de contrabando puesto que no concurren ninguno de los casos establecidos por la Ley antes citada. Si bien no estamos

⁵⁹ Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

ante un delito tipificado en el Código Penal sí estamos ante una infracción administrativa de contrabando. Así lo recoge el artículo 11.1 de la misma ley cuando dice:

“incurrirán en infracción administrativa de contrabando las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el artículo 35.4 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleven a cabo las acciones u omisiones tipificadas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la presente ley, cuando el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea inferior a 150.000 euros o 50.000 euros, respectivamente, o a 15.000 euros si se trata de labores de tabaco, y no concurren las circunstancias previstas en los apartados 3 y 4 de dicho artículo”.

Las infracciones administrativas de contrabando se clasifican en leves, graves o muy graves, según el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas, conforme a las cuantías siguientes: leves si se trata de labores de tabaco inferior a 1000 euros. Graves si se trata de labores de tabaco desde 1000 euros hasta 7200 euros y por último muy graves si se trata de labores de tabaco superior a 7200 euros.

Antes de iniciado el procedimiento sancionador por infracción administrativa de contrabando, las autoridades, los funcionarios y las fuerzas que, en el ejercicio de sus competencias, tengan conocimiento de conductas o hechos que puedan constituir infracción administrativa de contrabando, procederán a la aprehensión cautelar de los bienes, efectos e instrumentos que, de acuerdo con el artículo 5 de esta ley, puedan resultar decomisados⁶⁰. Serán decomisadas las mercancías que constituyan el objeto del delito⁶¹.

4. Incompatibilidades.

El señor Silvestre-Holms además de ser administrador de la sociedad Sousa-Holstein, S.A. también es Senador de las Cortes Generales del Reino de España.

Existen incompatibilidades, una vez alcanzada la elección, el parlamentario no se verá interferido en el desarrollo de sus cometidos parlamentarios por el ejercicio de ninguna otra función.

Así lo recoge el número dos del artículo 157 redactado por Ley Orgánica 8/1991, de 13 de marzo de modificación por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General cuando dice lo siguiente:

“... El mandato de los Diputados y Senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo,

⁶⁰ Artículo 14.2 de la Ley de represión del contrabando.

⁶¹ Artículo 5.1.a de la Ley de represión del contrabando.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma. En caso de reproducirse el pase a la situación administrativa o laboral que corresponda en aquéllos, deberá garantizarse la reserva de puesto o plaza y de destino, en las condiciones que determinen las normas específicas de aplicación”.

En este mismo artículo pero en su número uno se señala que el mandato de los Diputados o Senadores se ejercerá en régimen de “dedicación absoluta” en los términos previstos en la Constitución y en la presente Ley.

El artículo 16 del reglamento del Senado indica lo siguiente:

“La Comisión de Incompatibilidades emitirá, a la mayor brevedad, dictamen sobre la situación de cada uno de los Senadores con arreglo a la legislación vigente en la materia, pudiendo informar en dictamen de lista cuando no se proponga alguna incompatibilidad”.

Así en el artículo 17.1 continua diciendo:

“Declarada y notificada la incompatibilidad, el Senador incurso en ella dispondrá de ocho días naturales para optar entre el escaño y el cargo incompatibles. En el caso de no ejercitarse la opción señalada se entenderá que renuncia al escaño”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 157, el mandato de los Diputados y Senadores es incompatible con el desempeño de actividades privadas⁶².

En el mismo artículo 159 pero esta vez punto 2.c) si dice que en todo caso será incompatible el ser Senador con realizar las conductas siguientes, entre ellas, el desempeño de puestos o cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en Empresas o Sociedades arrendatarias o administradores de monopolios.

Con lo que la figura de Senador sería incompatible con la de administrador de una sociedad pues como define el artículo 209 de la Ley de Sociedades de Capital, Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio es competencia de los administradores la gestión y la representación de la sociedad en los términos establecidos en esta Ley.

En el artículo 159.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General nombra tres casos en los que sí será compatible en cargo de Senador con el de administrador de una sociedad y son los siguientes:

- a) *“La mera administración del patrimonio personal o familiar. Sin embargo, en ningún caso tendrán esta consideración las actividades privadas cuando el interesado, su cónyuge o persona vinculada a aquél en análoga relación de convivencia efectiva y descendientes menores de edad, conjunta o separadamente, tengan participación superior al 10 por 100 en actividades empresariales o profesionales de toda índole que tengan conciertos,*

⁶² Artículo 159 de la Ley de Régimen Electoral General.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

concesiones o contratos con Organismos o Empresas del sector público estatal, autonómico o local.

- b) La producción y creación literaria, científica, artística o técnica, así como las publicaciones derivadas de ellas, siempre que no se incurra en ninguno de los supuestos del artículo 157.2 o de los apartados 1 y 2 del presente artículo.*
- c) Las actividades privadas distintas de las recogidas en el apartado 2 de este artículo que serán autorizadas por la respectiva Comisión de cada Cámara, previa petición expresa de los interesados. La solicitud y la autorización que se otorgue se inscribirán en el Registro de Intereses a que se refiere el artículo 160 de la presente Ley”.*

Habría que entrar a valorar si la empresa Conservas y Congelados Sousa-Holstein, S.A. pertenece o no al patrimonio personal y familiar del señor Silvestre-Holms.

Los Diputados y Senadores, con arreglo a las determinaciones de los respectivos Reglamentos de las Cámaras, están obligados a formular declaración de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad conforme a lo establecido en esta Ley Orgánica y de cualesquiera otras actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias⁶³.

5. Las prerrogativas.

Además de las incompatibilidades, existen también unas prerrogativas individuales para cada Senador o Diputado tales como la inviolabilidad, la inmunidad y por último el fuero especial.

En lo que se refiere a la inmunidad, esta tiene por objetivo proteger al parlamentario frente a cualquier atentado contra su libertad que pudiera tener motivaciones políticas. Le protege, por tanto, frente a la detención o cualquier otra forma de privación de libertad y frente a la iniciación de procedimientos penales contra él⁶⁴.

⁶³ Artículo 160 de la Ley de Régimen Electoral General.

⁶⁴ STC 90/85, de 22 de Julio, fundamento jurídico 6 declara: “la inmunidad parlamentaria no puede concebirse como un privilegio personal, esto es, como un instrumento que únicamente se establece en beneficio de las personas de Diputados y Senadores, al objeto de sustraer sus conductas del conocimiento o decisión de jueces y tribunales. La existencia de tal tipo de privilegios pugnaría, entre otras cosas, con los valores de justicia y de igualdad que el artículo 1 de la CE reconoce como superiores de nuestro ordenamiento jurídico”.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

La inmunidad, en cuanto expresión más característica de la inviolabilidad de las Cortes Generales, no está concebida como una protección a los Diputados y Senadores frente a la improcedencia o falta de fundamentación de las acciones penales, sino frente a:

“la eventualidad de que la vía penal sea utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento de las cámaras o de alterar la composición que a las mismas ha dado la voluntad popular”.

La inmunidad no impide que se sigan procedimientos penales contra los parlamentarios, sino que su finalidad es garantizar que tales procedimientos no tendrán como móvil la persecución política. La protección se limita al ámbito penal. De ahí que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional una ley que extendía la necesidad de obtener autorización parlamentaria a los procedimientos de índole civil seguidos contra Diputados y Senadores.

El Tribunal Constitucional considera que tanto la inviolabilidad como la inmunidad exigen una interpretación estricta⁶⁵ y resolvió que la Ley constituía una injustificada extensión de la inviolabilidad que vulnera el derecho de terceros a la tutela judicial efectiva⁶⁶.

Por otro lado la inmunidad tampoco es absoluta dentro del ámbito penal, los parlamentarios pueden ser detenidos en caso de flagrante delito, y pueden ser procesados si lo autoriza la cámara. Artículo 71.2 de la Constitución española:

“Durante el periodo de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculcados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva”.

Lo característico de la inmunidad es que, para que se inicie un procedimiento penal contra un parlamentario, debe ser la cámara la que juzgue si en dicho procedimiento hay o no indicios de persecución política, concediendo o denegando el suplicatorio (la autorización) para continuar el procedimiento. Es realmente la cámara, pues, quien dispone de la prerrogativa, de suerte que aun cuando el parlamentario desee que se continúe el procedimiento no le cabe sino solicitar a la cámara que conceda el

⁶⁵ STC 51/85 de 10 de Abril, fundamento jurídico 6 “con carácter general, esta debe ser la interpretación del ámbito funcional en que se proyecta la garantía de la inviolabilidad. Un entendimiento estricto que, por lo demás, no impide las necesarias matizaciones, reconociendo que la prerrogativa puede amparar, también, los actos exteriores a la vida de las cámaras, que no sean sino reproducción literal de un acto parlamentario”.

⁶⁶ STC 9/90, fundamento jurídico 5: “ en resumen, se introduce... una autorización previa que dicho precepto constitucional sólo consiente en los procesos penales, creándose así una institución híbrida, compuesta a partir de elementos conceptuales de la inviolabilidad a los que se añade un instrumento autorizatorio, propio y exclusivo de la inmunidad, que carece de encaje constitucional y conlleva una irrazonable y desproporcionable limitación del derecho a la tutela judicial en cuanto impide el ejercicio independiente de la jurisdicción y, por tanto, resulta desprovista de la debida justificación, tanto desde la perspectiva del artículo 71 de la CE como desde la que corresponde al artículo 24.1 de la misma”.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

suplicatorio, que ésta puede denegar, como ya ha sucedido aún en contra del deseo del parlamentario.

Pero tampoco la cámara puede actuar de forma libérrima, pues el Tribunal Constitucional ha declarado que la denegación o concesión del suplicatorio debe ser motivada, expresando, por tanto, las razones que impelen a la cámara a autorizar que se prosiga o no el procedimiento⁶⁷.

En conclusión la sentencia 90/85 viene a establecer que el ejercicio de la facultad que a las cámaras atribuye el artículo 71.2 de la Constitución es libre por parte de estas, pero que ese ejercicio se inscribe en el marco constitucional y está por ello sujeto a las reglas de derecho del mismo, en particular a los derechos fundamentales por ella reconocidos, y, en razón de ello, sujeta a la fiscalización del Tribunal Constitucional.

Además no basta con la sola motivación a la que hacemos referencia con la anterior sentencia, sino que ésta debe ser coherente con la finalidad de la inmunidad⁶⁸, que es evitar la persecución política.

El ámbito temporal de la inmunidad se limita a la duración del mandato parlamentario, sin embargo, sus efectos son en cierto sentido retroactivos, de ser elegido como parlamentario alguien que se encuentra procesado, es menester la autorización de la cámara para continuar el procedimiento. Si el electo se encuentra detenido o procesado, es obligada su inmediata excarcelación.

Así lo señala el artículo 754 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando dice si el Senado o el Congreso negasen la autorización pedida, se sobreseerá respecto al Senador o Diputado a Cortes; pero continuará la causa contra los demás procesados.

Cualquier procedimiento penal contra un parlamentario debe contar con la concesión del suplicatorio para ser proseguido. Dicha autorización debe ser solicitada a

⁶⁷ STC 90/85, Caso Barral en su fundamento jurídico 2 dice lo siguiente: “*ciertamente el artículo 71.2 de la Constitución española atribuye a las cámaras parlamentarias una facultad consistente en conceder o no la autorización para encausar por vía penal a sus miembros, y no puede discutirse que esta sea una facultad de las que las cámaras disponen libremente. Lo mismo puede decirse respecto de otras facultades que deriven directamente de la Constitución española para los mismos o para otros órganos políticos, en relación a las cuales no se señalan condiciones específicas para su ejercicio. Ello no supone, sin embargo, que el libre ejercicio de una facultad así atribuida quede exento del principio del sometimiento a la Constitución, que, con carácter general, impone su artículo 9.1. De la misma manera a los poderes públicos.*”

En virtud de este principio, cualquier acto parlamentario con relevancia jurídica externa, esto es, que afecte a situaciones que excedan del ámbito estrictamente propio del funcionamiento interno de las cámaras, queda sujeto, comenzando por los de naturaleza legislativa, no sólo a las normas de procedimiento que en su caso establezca la Constitución, sino, asimismo, al conjunto de normas materiales que en la misma Constitución se contienen. No puede, por ello, aceptarse que la libertad con que se produce un acto parlamentario con esa relevancia jurídica para terceros llegue a rebasar el marco de tales normas, pues ello, en nuestro ordenamiento, sería tanto como aceptar la arbitrariedad”.

⁶⁸ STC 206/92, Caso González Bedoya.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

través del Tribunal Supremo, en cuanto que órgano competente para enjuiciar a Diputados y Senadores. Tanto el efecto retroactivo de la inmunidad como el hecho de que afecte a todo tipo de procesos, cualquiera que sea el delito que los ocasiona, se justifican, una vez más, en que el objetivo más inmediato es garantizar que una persecución política encubierta por una supuesta acusación penal no pueda tener efectos sobre la composición de la cámara ni condicionar la voluntad de los parlamentarios.

Si el suplicatorio es concedido, cabe continuar el procedimiento en otro caso, éste no podrá continuar contra la persona del parlamentario, aunque sí contra los demás inculcados, si los hubiere. Por otro lado, la concesión del suplicatorio y el eventual procesamiento posterior pueden dar lugar a la suspensión temporal del procesado en su condición del parlamentario.

Toda la información anterior viene reflejada en el reglamento del Senado cuando señala en su artículo 22.1 lo siguiente:

“Durante el período de su mandato, los Senadores gozarán de inmunidad y no podrán ser retenidos ni detenidos salvo en caso de flagrante delito. La retención o detención será comunicada inmediatamente a la Presidencia del Senado.

Los Senadores no podrán ser inculcados ni procesados sin la previa autorización del Senado, solicitada a través del correspondiente suplicatorio. Esta autorización será también necesaria en los procedimientos que estuvieren instruyéndose contra personas que, hallándose procesadas o inculpadas, accedan al cargo de Senador”.

Ya por último y en lo que se refiere a las prerrogativas, los parlamentarios también gozan de fuero especial. Esta institución consiste en que el órgano competente para conocer de las causas penales que se sigan contra Diputados y Senadores es el Tribunal Supremo. Así lo indica el artículo 71.3 de la Constitución Española cuando dice:

“En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

Se pretende, con ello, asegurar que el órgano que enjuicia los procesos contra Diputados y Senadores goce de las más altas costas de independencia, imparcialidad y cualificación jurídica que el ordenamiento puede otorgar, otorgando así una garantía adicional a los parlamentarios. Ciertamente ellos impiden al encausado ejercer, en su caso, el posible derecho a la revisión de la Sentencia por otro Tribunal, pero se trata de una garantía establecida en la Constitución con el propósito de otorgar una especial protección⁶⁹.

⁶⁹ STC 51/85, de 10 de Abril, fundamento jurídico 3: “además, es de tener en cuenta que, en supuestos como el que nos ocupa, la necesidad de que en las causas contra Diputados y Senadores sea competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materias de garantías constitucionales, está dispuesta por el artículo 71.3 de la CE. Determinadas personas gozan, “ex Constitutione”, en atención a su cargo, de una especial protección que contrarresta la imposibilidad de acudir a una instancia superior, pudiendo afirmarse que esas

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

En el artículo 501 del Código penal se indica que cuando la autoridad judicial inculpare o procesare a un miembro de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma sin los requisitos establecidos por la legislación vigente, será castigada con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de diez a veinte años.

6. Conclusión.

Con todo lo explicado, entendemos que además de que el cargo de administrador de la empresa Conservas y Congelados Sousa-Holstein le era totalmente incompatible con el puesto de Senador de las Cortes Generales del Reino de España a el señor Silvestre-Holms. Incurriría este como responsable del delito tipificado en el código penal en el artículo 318 bis sobre tráfico ilícito de migrantes así como en el delito tipificado en el artículo 177 bis sobre la trata de seres humanos para explotación laboral. Aunque estamos hablando de un senador de las cortes generales del Estado español, que en principio parece tener una inmunidad en lo que se refiere al ámbito penal, esta inmunidad no es absoluta como comentábamos antes. Habría que llevar a cabo el procedimiento a seguir explicado anteriormente. Y en el caso de que el suplicatorio le fuere denegado podría el Tribunal Supremo enjuiciarlo por los hechos. Ya que recordemos que esta “protección” hace frente únicamente a la eventualidad de que la vía penal sea utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento de las cámaras.

La inmunidad referente a los Senadores y Diputados de las Cortes Generales solo se dará en el ámbito penal con lo que, sí tendría que hacerse responsable de la sanción de multa por la infracción de extranjería, pero así no de la infracción administrativa por contrabando de tabaco.

Como explicaremos a continuación estamos ante un contrato mercantil de fletamento en el que el capitán y el cargador del buque tendrán la obligación de extender el conocimiento, en el cual se expresa el porte del buque⁷⁰. Serán pues el capitán, el porteador o el patrón los responsables de dicha sanción.

En todo caso podrían asumir la culpa los tripulantes del barco si se demostrara con las pruebas en derecho que fueron ellos quienes introdujeron en el buque las 2000 cajetillas de tabaco, hecho que no influirá en la respuesta a la solicitud de asilo que solicitan ya que no estamos ante una de las causas de exclusión recogidas en el artículo 8 de la Ley anteriormente citada 12/2009 reguladora del derecho de asilo.

particularidades garantías que acompañan a Senadores y Diputados disculpan la falta de un segundo grado jurisdiccional, por ellas mismas y porque el órgano encargado de conocer en las causas en que puedan hallarse implicados es el superior en la vida judicial ordinaria”.

⁷⁰ Artículo 706 del Código de Comercio.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

F. INFORME RAZONADO SOBRE LOS CONTRATOS MERCANTILES.

1. Antecedentes.

Por otro lado y en lo referente a los contratos mercantiles realizados en el caso presente, el primero y más importante es el contrato de fletamento.

El fletamento se puede definir como el contrato por el que una persona, el fletante, se obliga a poner un buque armado y equipado a disposición de otra, fletador, que se compromete a pagar una determinada cantidad, lo que recibiría el nombre de flete, bien en proporción a un tiempo determinado o bien por la realización de uno o más viajes.

2. Condiciones jurídicas sobre el contrato de fletamento.

En este caso se trataría pues de un contrato de fletamento y no de un contrato de transporte o contrato de arrendamiento puesto que un contrato de transporte radicaría en que el fletante a diferencia del porteador, no asume en todos los casos la obligación de transportar una mercancía de un lugar a otro, y cuando lo hace tal obligación no se considera como obligación principal, asumiendo especial relevancia la disposición del buque por parte del fletador.

El contrato de transporte es aquel por el cual el porteador se obliga, mediante un precio, a trasladar, de un lugar a otro a personas o cosas. Esta definición pretende comprobar todos los tipos o variedades del transporte, que puedan tener, sin embargo, una disciplina diversa según la modalidad de que se trate.

El porteador por tanto se obliga a realizar una obra determinada que consiste en el traslado de una cosa o una persona de un lugar a otro, y la segunda nota, que esta prestación tiene como contrapartida el pago de una determinada cantidad, ya que el contrato de transporte es oneroso.

La naturaleza jurídica de este contrato es discutida, pero la opinión dominante se inclina a considerarlo como un contrato de obra⁷¹. De tal manera que el porteador sólo cumple su prestación si ofrece a la otra parte el resultado prometido de la transferencia de la cosa o persona y este resultado ha de ser, en principio, completo e indivisible.

⁷¹ STS 11 junio de 1951 (RJ 1951, 1549).

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

Por otro lado la diferencia como el contrato de arrendamiento sería que en este caso el buque entregado y que se ha puesto a disposición del arrendatario no estaría armado ni equipado a diferencia del contrato de fletamento en el que sí lo estaría.

En el contrato de arrendamiento de buque su propietario, arrendador, se obliga mediante la percepción de un determinado canon, que suele denominarse flete, a poner a disposición de otra persona, arrendatario, por un tiempo determinado el uso de un buque que no está armado y equipado.

La distinción entre este contrato y el de fletamento se ha señalado por nuestra jurisprudencia diciendo que cuando se cede a otra persona el uso de un buque sin armar y equipar es un contrato de arrendamiento de buque, y no de fletamento⁷².

A pesar de que esta solución es seguramente la más adecuada a la vista de los preceptos del Código de comercio, bien pudiera, desde la perspectiva de una política legislativa, partir en una nueva regulación en esta materia de un concepto de contrato de fletamento en el que pueda intuirse dentro de él el arrendamiento de un buque sin armar y equipar. La aplicación de este contrato de las normas del Código de comercio sobre el arrendamiento de cosas algunas especialidades propias no sólo del objeto dado en arrendamiento, el buque, sino del uso del mismo⁷³.

Con lo que podemos sacar aquí dos conclusiones importantes del contrato de fletamento, la primera que ha de ser un buque perfectamente equipado y la segunda que la obligación principal consistiría en el transporte de mercancías. La empresa de la cual es administrador el señor Silvestre-Holms se dedicaba a las conservas y congelados con lo que realizó un contrato de fletamento para poder transportar y exportar a otros países sus productos y mercancías.

La distinción fundamental dentro del contrato de fletamento es la que separa el fletamento por tiempo del fletamento por viaje.

En relación al primero de ellos, el fletante se compromete a poner a disposición del fletador durante un período de tiempo determinado un buque armado y equipado. Esta modalidad como decíamos antes pueden llegar a confundirse con el contrato de arrendamiento de buque puesto que aparentemente se asemejan⁷⁴. La necesidad de que el fletante entregue al fletador el buque armado y equipado y lo mantenga en esas condiciones, conservando la gestión náutica del mismo, señala la diferencia, ya que el fletante por medio del capitán puede conservar la posesión del buque⁷⁵. Lo cual no impide que en esta clase de fletamento el capitán pase a depender de las órdenes del fletador en todo lo que a la explotación comercial del buque se refiere⁷⁶.

⁷² Se han ocupado de esta cuestión, entre otras, las SSTS de 24 de marzo de 1911, 7 junio de 1948 (RJ 1948, 784), 14 de mayo de 1975 (RJ 1975, 1235), de 26 de julio de 1990 (RJ 1990, 6181), 10 de noviembre de 1993 (RJ 1993, 8890) 1 de abril de 1995 (RJ1995, 2924).

⁷³ STS de 23 de noviembre de 2010 (RJ 2011, 570).

⁷⁴ SSTS de 26 de julio de 1990 (RJ 1990, 618), y 1 de abril de 1985 (RJ 1985, 2924).

⁷⁵ STS de 1 de abril de 1995 (RJ 1995, 2924).

⁷⁶ STS 14 de marzo de 1975 (RJ 1975, 1235).

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

Esta modalidad en la realidad del tráfico nos pone de manifiesto que aun en los casos de los buques de carga, el fletante no se convierte en transportista o porteador. Esta función la asume normalmente el fletador que es quien realiza los contratos de transporte con los cargadores.

No conocemos que clase de fletamento unía a la empresa Conservas y Congelados Sousa-Holteins, S. A con el fletante. Por lo que o bien podría unirles un contrato de fletamento por tiempo, el llamado “time charter”, o bien un contrato de fletamento por viaje, el cual consiste en que el fletante además de poner un buque a disposición del fletador, se compromete frente a él a realizar uno o más viajes, de forma que promete un determinado resultado: la navegación del buque desde un puerto a otro.

Esta circunstancia influye en el contenido de la relación jurídica, en cuanto que lógicamente el fletante ha de mantener en este caso un control sobre el buque superior al que se produce en el fletamento a tiempo para poder alcanzar el resultado de la realización de uno o más viajes.

Dentro del fletamento por viaje podemos, a su vez, hacer nuevas distinciones. Un primer criterio de clasificación es el que se fija en el número de viajes que el fletante se compromete a hacer. Otro criterio tiene en cuenta el espacio que el fletante pone a disposición del fletador, que puede ser la totalidad del buque o una parte.

3. INCOTERMS.

Otra de los temas a los que tenemos que hacer referencia dentro de los contratos mercantiles, son los INCOTERMS. Estos tienen un carácter contractual y no legal tal y como se ha señalado en diversas sentencias⁷⁷ con lo que es debemos a entrar a valorarlo aquí.

En el presente caso podemos hablar de (CFR) Coste y Flete (puerto de destino convenido), en el que el vendedor asume los gastos incluyendo el transporte principal hasta que la mercancía llega a su destino ósea a puerto, sin embargo el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentre cargada en el buque, en el país de origen. El medio de transporte utilizado es el barco marítimo o fluvial.

Las obligaciones del vendedor serían: la entrega de mercadería y documentos, el empaque y embalaje, el flete (de fábrica al lugar de exportación), aduanas (documentos, permisos, requisitos, impuestos), Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes), Flete (de lugar de exportación al lugar de importación).

⁷⁷ Audiencia Provincial de Cádiz, de 10 de octubre de 2000 u otras del Tribunal Supremo como la de 31 de marzo de 1997 o la de 3 de mayo de 1991.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

Las obligaciones del comprador serán: Pago de la mercadería, Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes), Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos), Flete y seguro (lugar de importación a planta), Demora.

También podemos hablar de (CIF) Costo, Seguro y Flete (puerto de destino convenido), el vendedor es el encargado de los gastos o costos incluidos el transporte principal y el seguro, solo es responsable de estos gastos hasta que la mercadería llegue al puerto de destino. El seguro beneficia al comprador. Este se utiliza para carga general o convencional, este INCOTERM es exclusivo del medio marítimo.

Las obligaciones del vendedor son las siguientes: Entrega Mercadería y documentos, empaque y embalaje, Flete (de fábrica al lugar de exportación), Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos), Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes), Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación).

Las obligaciones del comprador serán: Pago de la mercadería, Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes), Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos), Flete y seguro (lugar de importación a planta), Demora.

A modo de resumen y conforme a las reglas de los INCOTERMS CFR Y CIF el vendedor debe contratar bajo las condiciones usuales, y a sus propias expensas, el transporte de la mercancía al lugar o puerto de destino designado. Después de la entrega en el lugar o puerto de salida, el comprador asume todos los riesgos de la mercancía y deberá pagar los costes y gastos relativos a la mercancía mientras está en tránsito hasta su llegada al lugar o puerto de destino acordado, salvo que tales costes y gastos fueran por cuenta del vendedor según el contrato de transporte.

4. Conclusión.

Después de analizar el presente caso práctico, llegamos a la conclusión de que además de los INCOTERMS, nos encontramos ante un único contrato de naturaleza mercantil, el contrato de fletamento.

Este se puede definir como el contrato por el que una persona, el fletante, se obliga a poner un buque armado y equipado a disposición de otra, fletador, que se compromete a pagar una determinada cantidad, lo que recibiría el nombre de flete, bien en proporción a un tiempo determinado o bien por la realización de uno o más viajes.

En este caso se trataría pues de contrato de fletamento y no contrato de transporte o contrato de arrendamiento puesto que un contrato de transporte radicaría en que el fletante a diferencia del porteador, no asume en todos los casos la obligación de transportar una mercancía de un lugar a otro, y cuando lo hace tal obligación no se considera como obligación principal, asumiendo especial relevancia la disposición del buque por parte del fletador. Y en un contrato de arrendamiento el buque entregado y que se ha puesto a disposición del arrendatario no estaría armado ni equipado a diferencia del contrato de fletamento en el que sí lo estaría.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

G. Conclusiones.

A modo de resumen y en lo referente a la **primera** de las cuestiones planteadas, no cabe la menor duda de que las autoridades españolas actuaron con legalidad sobre el buque “Pobre Mitrofán”, a pesar de que la soberanía por parte del Estado español sobre la Zona Económica Exclusiva es bastante limitada.

El buque “Pobre Mitrofán” ondeaba pabellón español, lo que significa que tiene que cumplir con la legislación española y estar bajo su jurisdicción. Por tanto se encontrara donde se encontrara (Aguas Interiores, Mar Territorial, Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva o Alta Mar), el Estado Español siempre tendría jurisdicción sobre dicho buque.

El artículo 94.1 del Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar muestra los deberes del Estado de Pabellón de los buques y dice lo siguiente:

“Todo Estado ejercerá de manera efectiva su jurisdicción y control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales sobre los buques que enarbolan su pabellón”.

Con lo que la guardia civil española actuó con legalidad sobre dicho buque, así también al detener a todos los miembros de la tripulación, poniendo a disposición de la autoridad judicial a los nacionales de España y al resto de la tripulación (cuatro de Dinamarca, cuatro de Burkina-Faso, dos de Perú y dos de Filipinas) a disposición de la policía, así como por último proceder a decomisar las 2000 cajetillas de tabaco.

En relación a la **segunda** pregunta, llegamos a la conclusión de que tanto los nacionales de Dinamarca como lo que dicen ser nacionales de Perú y Filipinas deberán ser repatriados a sus Estados de origen y no concedérseles el asilo que solicitaban.

El protocolo de Naciones Unidas manifiesta que en estos casos no se hablaría de derecho de asilo sino de repatriación, pues ni los nacionales de Dinamarca, ni de Perú ni de Filipinas huyen de su país por algunos de los motivos regulados en la ley 12/2009 tales como persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas etc sino que intentaron entrar ilegalmente en España con ayuda de alguna organización transnacional ilegal. Por lo que tendrán que ser repatriados en las condiciones citadas anteriormente.

Todos los tripulantes del buque reconocieron ser víctimas de tráfico ilícito de migrantes con lo que podemos entender que colaboraron con las autoridades españolas contra redes organizadas.

Esto marca una excepción al protocolo contra el tráfico ilícito, sí bien el mismo nos ordena extraditar a las víctimas de tráfico ilícito siempre que no sean perseguidos en su país, la Ley de extranjería 4/2000 en su artículo 59 nos dice lo siguiente:

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

“el extranjero que se encuentre irregularmente en España y sea víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral o de tráfico ilícito de mano de obra o de explotación en la prostitución abusando de su situación de necesidad, podrá quedar exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia a los autores o cooperadores de dicho tráfico, o coopera y colabora con las autoridades competentes, proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el proceso correspondiente contra aquellos autores”.

Los tripulantes de Burkina-Faso también formaría parte de esa trama de tráfico ilícito de migrantes, sí bien sus circunstancias personales son distintas a los otros tripulantes del buque “Pobre Mitrofán”.

En el artículo 6 de la ley 12/2009 se citan los actos de persecución por lo que les podrá ser concedido el asilo a quienes lo soliciten. Así en el artículo 6.2 a y f se dice que los actos de persecución definidos en el apartado primero podrán revestir, entre otros, las siguientes formas: a) actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual y f) actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o niños. En el caso presente ambas niñas tendrían derecho a ser asiladas pues huyen para no ser sometidas a la mutilación genital, ya que entendemos que cuando la ley dice “actos de violencia o naturaleza sexual” o “actos de violencia física” perfectamente tendría cabida la circunstancia de la que estamos hablando.

En todo caso les será concedido el derecho de asilo en condición de refugiado. El artículo 3 de la Ley 12/2009 señala que le será concedido la condición de refugiado a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país.

En referencia a la **tercera** cuestión, las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, consistirán en una asignación económica por cada hijo, menor de 18 años o, cuando siendo mayor de dicha edad, esté afectado por una discapacidad, en un grado igual o superior al 65 por 100, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación de aquéllos, así como por los menores acogidos, en acogimiento familiar, permanente o pre adoptivo.

El señor Thomas y la señora Amina cumple pues todos los requisitos necesarios para poder acceder a dicha prestación, con lo que siguiendo el artículo 182 bis de la misma ley tendrán derecho a la cuantía en cómputo anual de 291 euros por cada hija a cargo.

Si bien el señor Thomas y la señora Amina tendrían derecho a la prestación solicitada por hijos menores de edad a cargo, no podemos decir lo mismo en cuanto se refiere a la prestación por desempleo que como señalamos antes, entendiendo por esta el subsidio por desempleo y no así la prestación contributiva para la cual es necesaria la contribución previa a la seguridad social.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

Tendrá derecho a percibir la renta de integración social de Galicia, denominada RISGA, se trata de una prestación pública destinada a garantizar recursos económicos de subsistencia a quien carezca de ellos, así como a alcanzar progresivamente su autonomía e integración social y laboral, mediante el derecho y el deber de participar en procesos personalizados de inserción con apoyo técnico y financiero del sistema gallego de servicios sociales y del sistema público de empleo de Galicia.

En relación a la **cuarta** pregunta, no cabe duda de que es correcta la apreciación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de que los hechos expuestos constituyen una infracción administrativa en materia de extranjería, de acuerdo con el artículo 51.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Según el Real Decreto Legislativo, de 4 de Agosto sobre infracciones y sanciones de orden social señala como conducta constitutiva de infracción muy grave que los empresarios utilicen a extranjeros sin haber obtenido con carácter previo el preceptivo permiso de trabajo, o su renovación, incurriendo en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros que haya ocupado.

Las infracciones muy graves tienen la multa de 10.001 hasta 100.000 euros, excepto la prevista en el artículo 54.2b), que lo será con una multa de 5000 a 10.000 por cada viajero transportado o con un mínimo de 750.000 euros a tanto alzado, con independencia del número de viajeros transportados.

En lo relativo a la **quinta** pregunta, entendemos que además de que el cargo de administrador de la empresa Conservas y Congelados Sousa-Holstein le era totalmente incompatible con el puesto de Senador de las Cortes Generales del Reino de España a el señor Silvestre-Holms. Incurriría este como responsable del delito tipificado en el código penal en el artículo 318 bis sobre tráfico ilícito de migrantes así como en el delito tipificado en el artículo 177 bis sobre la trata de seres humanos para explotación laboral. Aunque estamos hablando de un senador de las cortes generales del Estado español, que en principio parece tener una inmunidad en lo que se refiere al ámbito penal, esta inmunidad no es absoluta como comentábamos antes. Habría que llevar a cabo el procedimiento a seguir explicado anteriormente. Y en el caso de que el suplicatorio le fuere denegado podría el Tribunal Supremo enjuiciarlo por los hechos. Ya que recordemos que esta “protección” hace frente únicamente a la eventualidad de que la vía penal sea utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento de las cámaras.

La inmunidad referente a los Senadores y Diputados de las Cortes Generales solo se dará en el ámbito penal con lo que, sí tendría que hacerse responsable de la sanción de multa por la infracción de extranjería, pero así no de la infracción administrativa por contrabando de tabaco.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

Como explicaremos a continuación estamos ante un contrato mercantil de fletamento en el que el capitán y el cargador del buque tendrán la obligación de extender el conocimiento, en el cual se expresa el porte del buque. Serán pues el capitán, el porteador o el patrón los responsables de dicha sanción.

En todo caso podrían asumir la culpa los tripulantes del barco si se demostrara con las pruebas en derecho que fueron ellos quienes introdujeron en el buque las 2000 cajetillas de tabaco, hecho que no influirá en la respuesta a la solicitud de asilo que solicitan ya que no estamos ante una de las causas de exclusión recogidas en el artículo 8 de la Ley anteriormente citada 12/2009 reguladora del derecho de asilo.

Y ya por último en referencia a la **sexta** pregunta, el contrato que podemos observar en el presente caso práctico es el de fletamento. Este se puede definir como el contrato por el que una persona, el fletante, se obliga a poner un buque armado y equipado a disposición de otra, fletador, que se compromete a pagar una determinada cantidad, lo que recibiría el nombre de flete, bien en proporción a un tiempo determinado o bien por la realización de uno o más viajes.

En este caso se trataría pues de contrato de fletamento y no contrato de transporte o contrato de arrendamiento puesto que un contrato de transporte radicaría en que el fletante a diferencia del porteador, no asume en todos los casos la obligación de transportar una mercancía de un lugar a otro, y cuando lo hace tal obligación no se considera como obligación principal, asumiendo especial relevancia la disposición del buque por parte del fletador. Y en un contrato de arrendamiento el buque entregado y que se ha puesto a disposición del arrendatario no estaría armado ni equipado a diferencia del contrato de fletamento en el que sí lo estaría.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

ANEXO I



ESCRITO DE ALEGACIONES

Datos Generales

Espacio reservado Registro de Entrada

Espacio reservado Registro de Salida

Nº de Acta:

Datos Identificativos del Alegante

Nombre o Razón Social: N.I.F o C.I.F.:
Actividad: C.C.C.:
Domicilio Social:
Domicilio Centro Trabajo:
Localidad:
Provincia: Código Postal:

Datos del Representante Legal (en su caso)

Nombre y Apellidos:
N.I.F o C.I.F.: N.A.F.:
Domicilio:
Localidad:
Provincia: Código Postal:

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el art. 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que el presente formulario contiene datos de carácter personal que se incorporarán a un fichero titularidad del Ministerio de Empleo y Seg. Social y serán tratados con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud y, en su caso, a cederlos a las Instituciones y Organismos previstos en el art. 12 de la Ley 42/1997 de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de completar su gestión. Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito dirigido a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social donde se efectúe el Registro del presente documento.

I.P. 4108

CORREO ELECTRÓNICO/ WEB:
webirss@meys.es
www.empleo.gob.es/itsa

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS



ESCRITO DE ALEGACIONES

Por medio del presente escrito y habiendo recibido el/las Acta/s que se indica/n a continuación, incoada/s por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, contra la/s misma/s presento **ESCRITO DE ALEGACIONES** en base a los siguientes **MOTIVOS**:

Por tanto **SOLICITO**:

- ☐ La anulación del/de las Acta/s
- ☐ La reducción del importe consignado en el/las Acta/s

- ☐ La anulación o reducción del importe consignado en el/las Acta/s

FIRMA DEL ALEGANTE

Firmado:.....

1/P. -106

CORREO ELECTRÓNICO/ WEB:
webitss@meys.es
www.empleo.gob.es/itss

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

ANEXO II



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

Registro INSS

Solicitud de PRESTACIONES POR HIJO A CARGO

Antes de empezar a cumplimentar la solicitud lea detenidamente todos los apartados y las instrucciones sobre cada uno de ellos.
Debe imprimir un único ejemplar y presentarlo en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social. Para facilitar su presentación solicite cita previa en el teléfono 901 10 65 70 o en www.seg-social.es

1. DATOS DEL SOLICITANTE

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 1.1 DATOS PERSONALES | | DNI - NIE | | Núm. de la Seguridad Social | |
| Primer apellido | | Segundo apellido | | Nombre | |
| Apellidos de soltera | | Fecha de nacimiento | | Sexo <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer | |
| Nacionalidad | | Si es extranjero y reside en España: tipo de residencia <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal, vencimiento | | En trámite, desde | |
| Actúa en calidad de: <input type="checkbox"/> Progenitor/a o adoptante <input type="checkbox"/> Acogedor/a permanente o preadoptivo <input type="checkbox"/> Tutor <input type="checkbox"/> Guardador <input type="checkbox"/> Curador | | | | | |
| Domicilio habitual: (calle, plaza ...) | | Número | | Bloque Escalera Piso Puerta Teléfono de contacto | |
| Código postal | | Localidad | | Provincia País | |
| 1.2 SI LO SOLICITA COMO PROGENITOR/A, ADOPTANTE O ACOGEDOR/A PERMANENTE O PREADOPTIVO, RELLENE LOS SIGUIENTES DATOS | | | | | |
| ESTADO CIVIL <input type="checkbox"/> Soltero/a <input type="checkbox"/> Casado/a <input type="checkbox"/> Viudo/a <input type="checkbox"/> Separado/a <input type="checkbox"/> Divorciado/a | | SE ENCUENTRA (en relación con el otro progenitor/a, adoptante o acogedor/a) <input type="checkbox"/> Soltero/a <input type="checkbox"/> Casado/a <input type="checkbox"/> Viudo/a <input type="checkbox"/> Separado/a de hecho <input type="checkbox"/> Separado/a legalmente <input type="checkbox"/> Divorciado/a <input type="checkbox"/> En convivencia de hecho | | ¿Existe convivencia entre ambos? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | |
| Título de familia numerosa <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | Fecha de expedición del título de familia numerosa | | Si hay hijos con discapacidad, indique cuántos | |
| Fecha de vencimiento | | Título de familia núm. | | Lo ha solicitado <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | |
| Si está separado/a o divorciado/a: Recibe pensión compensatoria <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | Importe mensual | | € | |
| 1.3 DATOS DE LA SITUACIÓN LABORAL | | | | | |
| ¿Trabaja actualmente? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | En caso afirmativo: <input type="checkbox"/> por cuenta propia <input type="checkbox"/> por cuenta ajena | | ¿Está en desempleo? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | |
| Nombre de la empresa | | País | | ¿Cobra prestación de desempleo? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | |
| ¿Cobra alguna/s prestación/es o subsidio/s de alguna Entidad? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | La ha solicitado <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | País que lo abona | |
| Clase de prestación | | Organismo | | País que lo abona | |
| Importe (anual) | | € | | | |

2. DATOS DEL OTRO PROGENITOR/A, ADOPTANTE O ACOGEDOR/A PERMANENTE O PREADOPTIVO

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 2.1 DATOS PERSONALES | | DNI - NIE | | Núm. de la Seguridad Social | |
| Primer apellido | | Segundo apellido | | Nombre | |
| Apellidos de soltera | | Fecha de nacimiento | | Sexo <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer | |
| Nacionalidad | | Si es extranjero y reside en España: tipo de residencia <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal, vencimiento | | En trámite, desde | |
| Estado civil: <input type="checkbox"/> Soltero/a <input type="checkbox"/> Casado/a <input type="checkbox"/> Viudo/a <input type="checkbox"/> Separado/a <input type="checkbox"/> Divorciado/a | | | | | |

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

| | |
|---------------------|------------|
| Apellidos y nombre: | DNI - NIE: |
|---------------------|------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-----------|--|--------|--------|----------|------|--------|----------------------|
| Domicilio habitual: (calle, plaza ...) | | | | | Número | Bloque | Escalera | Piso | Puerta | Teléfono de contacto |
| Código postal | Localidad | | Provincia | | País | | | | | |

2.2 DATOS DE LA SITUACIÓN LABORAL

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| ¿Trabaja actualmente? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | En caso afirmativo: <input type="checkbox"/> por cuenta propia <input type="checkbox"/> por cuenta ajena | | ¿Está en desempleo? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | |
| Nombre de la empresa _____ | | País _____ | | ¿Cobra prestación de desempleo? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | |
| ¿Cobra alguna/s prestación/es o subsidio/s de alguna Entidad? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | La ha solicitado <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | | |
| Clase de prestación _____ | | Organismo _____ | | País que lo abona _____ | |
| Importe (anual) _____ € | | | | | |

3. DATOS DE LOS HIJOS (CAUSANTES) POR LOS QUE PIDE LA PRESTACIÓN

| | | | | | |
|---|--|---------------------|--|-----------------------------|--|
| 3.1 DATOS PERSONALES | | DNI - NIE | | Núm. de la Seguridad Social | |
| Primer apellido | | Segundo apellido | | Nombre | |
| Fecha de nacimiento | Sexo <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer | Nacionalidad | Si es extranjero y reside en España: tipo de residencia <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal, vencimiento _____ En trámite, fecha de solicitud _____ | | |
| Estado civil <input type="checkbox"/> Soltero/a <input type="checkbox"/> Casado/a <input type="checkbox"/> Viudo/a <input type="checkbox"/> Separado/a <input type="checkbox"/> Divorciado/a | ¿Reside en España? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | País de nacimiento | | |
| | | Indique país: _____ | | | |

3.2 DATOS SOBRE CONVIVENCIA/DEPENDENCIA ECONÓMICA

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|
| Convive con el solicitante <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | ¿Trabaja? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | ¿Está en desempleo? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | ¿Cobra prestación de desempleo? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | |
| Con el otro progenitor <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | Ingresos mensuales actuales (rendimientos íntegros excluidos los gastos deducibles según legislación fiscal) _____ | | | | | |
| ¿Cobra alguna/s prestación/es o subsidio/s incluido/s otro/s de protección familiar? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | La ha solicitado <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | | | | |
| Cuantía mensual _____ | | Clase de prestación _____ | | Organismo _____ | | País _____ | |

3.3 DATOS SOBRE LA DISCAPACIDAD

| | | | |
|--|--|--|--|
| ¿Está incapacitado por sentencia judicial? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | Porcentaje _____ % | |
| ¿Tiene reconocido algún grado de discapacidad? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | En su caso, fecha vencimiento _____ | |
| ¿Tiene carácter permanente? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | Si ha solicitado el título de discapacidad, fecha de solicitud _____ | |
| ¿Tiene reconocida la ayuda de 3ª persona? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | Si ha solicitado ayuda de 3ª persona, fecha de solicitud _____ | |
| ¿Tiene título de discapacidad? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | | |

SEGUNDO CAUSANTE

| | | | | | |
|---|--|---------------------|--|-----------------------------|--|
| 3.4 DATOS PERSONALES | | DNI - NIE | | Núm. de la Seguridad Social | |
| Primer apellido | | Segundo apellido | | Nombre | |
| Fecha de nacimiento | Sexo <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer | Nacionalidad | Si es extranjero y reside en España: tipo de residencia <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal, vencimiento _____ En trámite, fecha de solicitud _____ | | |
| Estado civil <input type="checkbox"/> Soltero/a <input type="checkbox"/> Casado/a <input type="checkbox"/> Viudo/a <input type="checkbox"/> Separado/a <input type="checkbox"/> Divorciado/a | ¿Reside en España? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | País de nacimiento | | |
| | | Indique país: _____ | | | |

3.5 DATOS SOBRE CONVIVENCIA/DEPENDENCIA ECONÓMICA

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|
| Convive con el solicitante <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | ¿Trabaja? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | ¿Está en desempleo? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | ¿Cobra prestación de desempleo? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | |
| Con el otro progenitor <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | Ingresos mensuales actuales (rendimientos íntegros excluidos los gastos deducibles según legislación fiscal) _____ | | | | | |
| ¿Cobra alguna/s prestación/es o subsidio/s incluido/s otro/s de protección familiar? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | La ha solicitado <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | | | | |
| Cuantía mensual _____ | | Clase de prestación _____ | | Organismo _____ | | País _____ | |

 20131121
8-004 PF-5 (cas)

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

| | |
|---------------------|---|
| Apellidos y nombre: | DNI - NIE: ③ |
|---------------------|---|

3.6 DATOS SOBRE LA DISCAPACIDAD

| | | |
|--|---|--|
| ¿Está incapacitado por sentencia judicial? | <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | Porcentaje _____ % |
| ¿Tiene reconocido algún grado de discapacidad? | <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | En su caso, fecha vencimiento _____ |
| ¿Tiene carácter permanente? | <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | Si ha solicitado el título de discapacidad, fecha de solicitud _____ |
| ¿Tiene reconocida la ayuda de 3ª persona? | <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | Si ha solicitado ayuda de 3ª persona, fecha de solicitud _____ |
| ¿Tiene título de discapacidad? | <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | |

TERCER CAUSANTE

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| 3.7 DATOS PERSONALES | | DNI - NIE | Núm. de la Seguridad Social |
| Primer apellido | | Segundo apellido | Nombre |
| Fecha de nacimiento | Sexo <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer | Nacionalidad | Si es extranjero y reside en España: tipo de residencia <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal, vencimiento _____ <input type="checkbox"/> En trámite, fecha de solicitud _____ |
| Estado civil <input type="checkbox"/> Soltero/a <input type="checkbox"/> Casado/a <input type="checkbox"/> Viudo/a <input type="checkbox"/> Separado/a <input type="checkbox"/> Divorciado/a | ¿Reside en España? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | País de nacimiento | |
| Indique país: _____ | | | |

3.8 DATOS SOBRE CONVIVENCIA/DEPENDENCIA ECONÓMICA

| | | | |
|--|--|---|---|
| Convive con el solicitante <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | ¿Trabaja? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | ¿Está en desempleo? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | ¿Cobra prestación de desempleo? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ |
| Con el otro progenitor <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | Ingresos mensuales actuales (rendimientos íntegros excluidos los gastos deducibles según legislación fiscal) _____ | | |
| ¿Cobra alguna/s prestación/es o subsidio/s incluido/s otro/s de protección familiar? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | | La ha solicitado <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | |
| Cuantía mensual _____ | Clase de prestación _____ | Organismo _____ | País _____ |

3.9 DATOS SOBRE LA DISCAPACIDAD

| | | |
|--|---|--|
| ¿Está incapacitado por sentencia judicial? | <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | Porcentaje _____ % |
| ¿Tiene reconocido algún grado de discapacidad? | <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | En su caso, fecha vencimiento _____ |
| ¿Tiene carácter permanente? | <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | Si ha solicitado el título de discapacidad, fecha de solicitud _____ |
| ¿Tiene reconocida la ayuda de 3ª persona? | <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | Si ha solicitado ayuda de 3ª persona, fecha de solicitud _____ |
| ¿Tiene título de discapacidad? | <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ | |

4. DECLARACIÓN DE INGRESO (cuando se solicita para hijos sin discapacidad)

| | |
|------------------|---|
| 20131121 | 4.1 DEL SOLICITANTE (sólo si es progenitor/a, adoptante o acogedor/a familiar permanente o preadoptivo) |
| | Declaro que los ingresos, por cualquier concepto (ver instrucción número 4 para cumplimentar este formulario) ascendieron a la cantidad de _____ € |
| | 4.2 DEL OTRO PROGENITOR/A ADOPTANTE O ACOGEDOR/A FAMILIAR PERMANENTE O PREADOPTIVO |
| 8-004 PF-5 (cas) | Declaro que los ingresos, por cualquier concepto (ver instrucción número 4 para cumplimentar este formulario) ascendieron a la cantidad de _____ € |

5. OTROS DATOS DEL SOLICITANTE

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|------------------|--------|
| 5.1 A EFECTOS FISCALES | | | | | |
| Residencia fiscal: | | | | | |
| Provincia _____ | | | País _____ | | |
| 5.2 DOMICILIO DE COMUNICACIONES A EFECTOS LEGALES | | | | | |
| Nombre o Razón social | | | | | |
| Domicilio habitual: (calle, plaza ...) | | | | Número | Bloque |
| | | | | Escalera | Piso |
| | | | | Puerta | |
| Código postal | Localidad | Provincia | País | Apdo. de correos | |

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Apellidos y nombre: | DNI - NIE: ④ |
|---------------------|--------------|

| | |
|--|---|
| Si desea recibir información por correo electrónico, indíquelo | Si desea recibir información por un SMS, indique su móvil |
| LENGUA COOFICIAL en la que desea recibir su correspondencia: | |

6. ALEGACIONES

| |
|--|
| |
|--|

7. ELECCIÓN DE MODALIDAD DE COBRO

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------|------------------|
| PAGO EN ESPAÑA (Banco o Caja de Ahorro) <input type="checkbox"/> EN VENTANILLA <input type="checkbox"/> EN CUENTA/LIBRETA | código IBAN: | | | | |
| | CÓDIGO PAÍS | CCC | | | |
| | | ENTIDAD | OFICINA/SUCURSAL | D. CONTROL | NÚMERO DE CUENTA |
| | | | | | |
| PAGO EN EL EXTRANJERO | <input type="checkbox"/> cheque | <input type="checkbox"/> transferencia | País | | |
| | BIC: | | | | |
| | IBAN: | | | | |
| | CCC: | | | | |

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente solicitud, manifestando que quedo enterado de la obligación de comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social cualquier variación que de ellos pudiera producirse en lo sucesivo y dentro de los 30 días siguientes a aquél en el que suceda.

AUTORIZO la consulta de mis datos de identificación personal y la verificación y cotejo de los datos económicos declarados con los de carácter tributario obrantes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los términos establecidos en la O. M. 18-11-99 (BOE del día 30), o en cualquier otro Organismo que tuviera atribuida la competencia sobre ellos. Asimismo manifiesto, igualmente, mi consentimiento para la consulta u obtención de copia de datos sobre la valoración de la discapacidad custodiados por los Servicios Sociales de carácter público, así como la consulta de los datos de domicilio e identidad a través de los Sistemas de Verificación establecidos (Sistemas de Verificación de Datos de Identidad y de Residencia). Asimismo, en su caso, también autorizo la consulta de mis datos sobre residencia legal en España obrantes en el Fichero de datos de expedientes de trámites de extranjería del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el Fichero Adextra del Ministerio del Interior y el Fichero de Permisos y Autorizaciones a Extranjeros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Todos estos accesos informáticos se realizarán, en todo caso, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de esta solicitud.

SOLICITO, mediante la firma del presente impreso, que se dé curso a esta petición de prestación familiar, adoptando para ello todas las medidas conducentes a su mejor resolución.

....., a de de 20

Firma del solicitante y del otro titular

8. COBRO DE LA PRESTACIÓN POR CAUSANTE MAYOR DE 18 AÑOS

| | | | | | |
|--|--------------|---------|------------------|------------|------------------|
| PAGO EN ESPAÑA (Banco o Caja de Ahorro) <input type="checkbox"/> EN VENTANILLA <input type="checkbox"/> EN CUENTA/LIBRETA | código IBAN: | | | | |
| | CÓDIGO PAÍS | CCC | | | |
| | | ENTIDAD | OFICINA/SUCURSAL | D. CONTROL | NÚMERO DE CUENTA |
| | | | | | |

....., a de de 20

Firma del solicitante y causante

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

Registro INSS

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN

Clave de identificación de su expediente:

Funcionario de contacto:

Apellidos y nombre:

DNI - NIE:



SOLICITUD DE PRESTACIÓN FAMILIAR POR HIJO A CARGO

DOCUMENTOS QUE SE LE REQUIEREN EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD POR EL INSS:

- 1 ☐ DNI de ☐ NIE de:
☐ Solicitante
☐ Otro progenitor
☐ Causantes núms.:
- 2 ☐ Certificado de discapacidad expedido por el IMSERSO u Organismo competente de la Comunidad Autónoma o justificante de haberlo pedido
- 3 ☐ Libro de familia
- 4 ☐ Partida de nacimiento
- 5 ☐ Título de familia numerosa
- 6 ☐ Justificante de ingresos
☐ Nómina
☐ Declaración de renta
☐ Certificado de empresa/SPEE
☐ Declaración jurada
☐ Otros documentos
- 7 ☐ Certificado de empadronamiento
- 8 ☐ Certificado del registro de ciudadanos de la Unión Europea/EEE
- 9 ☐ Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea/EEE
- 10 ☐ Autorización residencia temporal/permanente
- 11 ☐ Tarjeta de identidad de extranjeros (TIE) ☐ Solicitud TIE

En supuestos de separación judicial o divorcio:

- 12 ☐ Justificante pensión compensatoria
- 13 ☐ Sentencia judicial que acredite dichas situaciones
- 14 ☐ Declaración de si ha obtenido de su cónyuge la prestación de Protección Familiar después de la fecha de separación o divorcio, en caso de cambio de titular

En supuestos de separación de hecho o separación/divorcio en trámite:

- 15 ☐ Copia diligenciada por el Juzgado de la demanda de separación/divorcio
- 16 ☐ Copia de la denuncia de abandono del hogar familiar
- 17 ☐ Convenio regulador sellado y diligenciado por el Juzgado
- 18 ☐ Testimonio de la aprobación judicial de las medidas provisionales en que se acuerde la guarda y custodia

En el supuesto de parejas de hecho en las que no existe convivencia:

- 19 ☐ Documento judicial que atribuya la guarda y custodia de los hijos comunes a un determinado progenitor o a ambos de forma compartida.

En supuestos de tutela, guarda, curatela o acogimiento de menores o mayores con discapacidad:

- 20 ☐ Resolución judicial mediante la que se constituye la tutela/curatela o acogimiento
- 21 ☐ Documento de toma de posesión o aceptación del cargo de tutor
- 22 ☐ Auto judicial encomendando la guarda y custodia
- 23 ☐ Otros

Recibí

Firma

DOCUMENTOS NO NECESARIOS PARA EL TRÁMITE, QUE APORTA VOLUNTARIAMENTE EL SOLICITANTE:

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____

Recibí los documentos requeridos a excepción de los
núms. _____

Firma

Cargo y nombre del funcionario _____

Fecha _____ Lugar _____

DILIGENCIA DE COMPULSA: A la vista de los
siguientes documentos originales y en vigor:

Se expide la presente diligencia de verificación para hacer
constar que los datos reflejados en este formulario coinci-
den fielmente con los que aparecen en los documentos
originales aportados o exhibidos por el solicitante.

Firma

Cargo y nombre del funcionario _____

Fecha _____ Lugar _____

Esta solicitud va a ser tramitada por medios informáticos. Los datos personales que figuran en ella serán incorporados a un fichero creado por la Orden 27-7-1994 (BOE del día 29) para el cálculo, control y revalorización de la prestación que se le reconozca, y permanecerán bajo custodia de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En cualquier momento puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los datos incorporados al mismo ante la Dirección Provincial del INSS (art. 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. BOE del día 14).

ANEXO III



| | | | |
|--|-------------------------|---|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO SOLICITUDE DE RENDA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE GALICIA | | CÓDIGO DO PROCEDIMENTO BS626F | DOCUMENTO SOLICITUDE |
| PROVINCIA <div></div> | CONCELLO <div></div> | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| APELLIDOS | | NOMBRE | | NIF/NIE | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |
| DATA DE NACIMIENTO | | ENDEREZO | | | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | | |
| PROVINCIA | | LOCALIDADE | | CÓDIGO POSTAL | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |
| CORREO ELECTRÓNICO | | TELÉFONO | | | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | | |

1

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

DECLARACIÓN RESPONSABLE DA PERSOA SOLICITANTE DA RISGA

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE

1) Ingresos das persoas conviventes (Datos de todas as persoas residentes no domicilio do/da solicitante, incluíndo, no seu caso, os datos de todas as unidades de convivencia existentes no mesmo).

1.1) Que o total dos ingresos actuais da/do solicitante e do resto de conviventes en concepto de retribucións, rendas, prestacións, axudas, subsidios ou por calquera outro concepto ascende a:

| PERCEPTOR/A | CONCEPTO | CONTÍA MENSUAL | CONTÍA ANUAL |
|-------------|----------|-------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1.2) Que o/a solicitante e o resto das persoas conviventes dispoñen das seguintes cantidades en concepto de pagamento único, depósitos bancarios, contas correntes ou de aforro:

| TITULAR | CONCEPTO | CONTÍA |
|---------|----------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

1.3) Que a/o solicitante e o resto de conviventes dispoñen dos seguintes bens móbiles ou inmóbiles sobre os que posúen un dereito de propiedade, posesión, usufruto ou calquera outro de análoga natureza, con excepción da vivenda destinada ao seu uso:

| TITULAR | CONCEPTO | VALOR |
|---------|----------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2) ☐ Que non dispoño de vivenda propia.

☐ Que dispoño de vivenda propia da que achego recibo do imposto sobre bens inmóbiles

3) ☐ 3.1 Que me corresponden os seguintes dereitos de contido económico de acordo coa lexislación vixente (créditos legais, convencionais, pensións compensatorias, etc...): e que:

☐ a) Si teño exercitadas as accións para o seu cobro.

☐ b) Non teño exercitadas as accións para o seu cobro.

☐ 3.2 Que non me corresponde ningún dereito de contido económico de acordo coa lexislación vixente.

4) ☐ Que non me corresponde ningunha prestación ou axuda pública incompatible coa prestación.

5) Existen persoas legalmente obrigadas a prestar alimentos:

☐ Si ☐ Non

6) Antes de acadar a maioría de idade estivo tutelado/a pola Xunta de Galicia e internado en centros de protección de menores ou en acollemento familiar

☐ Si ☐ Non

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

IMPRESO PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

I.- DATOS PERSOAIS

* Cando se pretenda o pago a persoa ou entidade distinta do beneficiario/a (comunidades terapéuticas, etc) deberán facerse constar os seus datos e o seu número de conta bancaria.

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1º APELIDO | 2º APELIDO | NOME | DNI/NIE Nº |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| ENDEREZO | | | |
| <input type="text"/> | | | |
| PROVINCIA | LOCALIDADE | | CÓDIGO POSTAL |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |

II.- DATOS DA ENTIDADE FINANCEIRA

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| NOME DA ENTIDADE FINANCEIRA | |
| <input type="text"/> | |
| ENDEREZO DA AXENCIA | |
| <input type="text"/> | |
| PROVINCIA | LOCALIDADE |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Lugar e data

, de de 200

Sinatura da persoa solicitante

Dilixencia do/a axente pagador/a.- Acéptase a designación de conta bancaria formulada pola persoa perceptora á que se refire o presente documento, nos termos que nela figuran.

Lugar e data

, de de 200

Sinatura e selo da entidade financeira

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CLAVE BANCO | CLAVE SUCURSAL | D.C | CONTA Nº |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ACHEGAR AO EXPEDIENTE

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR A PERSOA SOLICITANTE

- ☐ COPIA COTEXADA DO DNI DO/DA SOLICITANTE E DO RESTO DAS PERSOAS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONVIVENCIA E, SE É O CASO, COPIA DO LIBRO DE FAMILIA.
- ☐ NO SEU CASO, COPIA COTEXADA DO RECIBO DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DA VIVENDA PROPIA.
- ☐ XUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL QUE PROCEDA NO CASO DE SER TITULAR DOUTROS BENS MOBLES OU INMOBLES.
- ☐ COPIA COTEXADA DO CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE NO SUPOSTO DE QUE A/O SOLICITANTE OU CALQUERA DAS PERSOAS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONVIVENCIA TEÑA A CONDICIÓN DE PERSOA CON DISCAPACIDADE.
- ☐ NO CASO DE SER VÍTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA QUE CAMBIA O SEU DOMICILIO POR MOTIVOS DE SEGURIDADE DEBERÁ PRESENTAR SOLICITUDE DE ORDE DE PROTECCIÓN.
- ☐ NO CASO DAS PERSOAS CIDADÁS PROCEDENTES DOUTROS ESTADOS DEBERÁN PRESENTAR COPIA DO PASAPORTE OU DOCUMENTO DE IDENTIDADE EN VIGOR E COPIA DA TARXETA DE IDENTIDADE DE ESTRANXEIROS CANDO ESTEAN OBRIGADOS/AS A OBTELO. NO CASO DE PERSOAS CIDADÁS DE ESTADOS NON MEMBROS DA UNIÓN EUROPEA, ESPAÑO ECONÓMICO EUROPEO OU CONFEDERACIÓN SUÍZA DEBERÁN PRESENTAR, EN TODO CASO, COPIA COTEXADA DA TARXETA DE IDENTIDADE DE ESTRANXEIROS OU DA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DO PERMISO DE RESIDENCIA.
- ☐ NO CASO DE PERSOAS CIDADÁS PROCEDENTES DOUTRAS CC.AA DO ESTADO ESPAÑOL QUE SEXAN BENEFICIARIAS DO SALARIO SOCIAL DA CC AA DA QUE PROCEDEN DEBERÁN PRESENTAR COPIA COTEXADA DA RESOLUCIÓN DE OUTORGAMENTO.
- ☐ NO CASO DE PERSOAS EMIGRANTES QUE FIXASEN A SÚA RESIDENCIA NO TERRITORIO DA CC AA GALEGA DEBERÁN PRESENTAR COPIA COTEXADA DA BAIXA CONSULAR E ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DA SÚA ÚLTIMA VECIÑANZA ADMINISTRATIVA ANTERIOR Á EMIGRACIÓN EN CALQUERA DOS CONCELLOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA.
- ☐ NO CASO DE PERSOAS MAIORES DE 18 ANOS EN SITUACIÓN DE ORFANDADE ABSOLUTA DEBERÁN ACREDITAR A DEVANDITA SITUACIÓN.
- ☐ NO CASO DE QUE O/A SOLICITANTE ESTIVISE EMPADROADO DURANTE O ANO INMEDIATAMENTE ANTERIOR NUN OU VARIOS CONCELLOS DISTINTOS DE AQUÉL NO QUE TRAMITARA A SOLICITUDE, DEBERÁ XUNTAR OS CERTIFICADOS DE EMPADROAMENTO QUE PROCEDAN.
- ☐ NO SEU CASO, ACREDITACIÓN DE INGRESOS DE TODOS/AS OS/AS CONVIVENTES (IRPF, NÓMINA, ETC.)

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA QUE DEBERÁ ACHEGAR O CONCELLO

- ☐ CERTIFICACIÓN DE EMPADROAMENTO DA/DO SOLICITANTE DURANTE O ANO INMEDIATAMENTE ANTERIOR Á FORMULACIÓN DA SOLICITUDE.
- ☐ CERTIFICADO DE TITULARIDADE DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA INSCRITOS NO CORRESPONDENTE REXISTRO RESPECTO A TODAS AS PERSOAS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONVIVENCIA.
- ☐ INFORME SOCIAL.
- ☐ PROPOSTA(S) DO(S) PROXECTO(S) DE INSERCIÓN QUE CORRESPONDA(N).
- ☐ PROPOSTA DE RESOLUCIÓN.

De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmase ós titulares dos datos, de xeito expreso, preciso e inequívoco do seu tratamento por parte da Consellería de Traballo e Benestar e a súa incorporación ó ficheiro mixto denominado "RISGA", inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, cuxa finalidade é a determinación daquelas persoas que polas súas características teñen dereito á obtención da Renda de integración social de Galicia (RISGA).

Ademais, infórmase ó interesado, ou representante legal de ser o caso, da obrigatoriedade das respostas, a negativa a facilitar os datos requeridos na solicitude suporá a non tramitación da mesma. O titular dos datos autoriza expresamente o acceso ós seus datos contidos en ficheiros doutras Administracións Públicas co obxecto de contrastar a información facilitada na solicitude. Os datos facilitados poderán ser comunicados ás entidades xestoras da Seguridade Social dispostas no Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

Os interesados poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición perante o responsable do ficheiro: Consellería de Traballo e Benestar. Subdirección Xeral de Inclusión Social, Servizo de Prestacións. Complexo Administrativo de San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela (A Coruña).

Con carácter previo á presentación desta solicitude, o solicitante ou o seu representante legal deberá informar ós conviventes dos que aporte datos persoais, dos extremos contidos nesta cláusula e solicitar o seu consentimento para a inclusión dos mesmos na solicitude.

BIBLIOGRAFÍA:

1) Manuales:

- PORTERO MOLINA, J. A; *Constitución y jurisprudencia constitucional*, Ed. Tirant lo Blanch. Valencia 2004.

- LÓPEZ GUERRA, L.; *Derecho constitucional, volumen II Los poderes del Estado y la organización territorial del Estado*, Ed. Tirant lo Blanch. Valencia 2007.

- MARTÍNEZ GIRÓN, J.; *Derecho crítico del trabajo*, Ed. Netbiblo. 2011.

- GALÁN GUTIERREZ, C. J; *Nóminas, seguridad social y contratación laboral*, Ed. FC EDITORIAL. Madrid 2013.

- SÁNCHEZ CALERO, F.; *Instituciones de Derecho mercantil*, volumen II, Ed. Aranzadi. 34º edición.

- DIEZ DE VELASCO, M.; *Instituciones de derecho internacional público*, Ed. Tecnos. Decimoctava edición.

- PASTOR RIDRUEJO, J. A; *Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales*, Ed. Tecnos. Decimoséptima edición.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

- SOROTEA LICERES, J.; *La jurisprudencia del Tribunal Internacional del derecho del mar*, Ed. Dilex S.L. 1997-2005.
- GORTÁZAR ROTAECHE, C. J; *Derecho de asilo y <<no rechazo>> del refugiado*. Ed.Dykinson-Universidad Pontificia Comillas, Madrid 1997.
- VV.AA; *La situación de los extranjeros en relación con el orden social*. Ed. Consejo General del Poder Judicial. Centro de documentación, 2005.

2) Legislación:

- Ley 12/2009, de 30 de Octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
- Ley 12/1995, de 12 de Diciembre, contra la represión del contrabando.
- Ley 4/2000, de 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
- Ley 1/1994, de 20 de Junio, general de la seguridad social.
- Ley 5/2000, de 4 de agosto, de infracciones y sanciones en el Orden Social.
- Ley 1/1995, de 24 de Marzo, Estatuto de los trabajadores.
- Ley 8/1991, de 13 de Marzo, del Régimen Electoral General.
- Ley 42/1997, de 14 de Noviembre, reguladora de la inspección del trabajo.
- Ley 10/2003, de 27 de Noviembre, de inclusión social.
- Ley 9/1991, de 2 de Octubre, de medidas básicas para la inserción social.
- Ley 27/1992, de 24 de Noviembre, de puertos de Estado y de la marina mercante.
- Ley 15/1978, de 20 de Febrero, sobre Zona Económica Exclusiva.

INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS

- Ley 39/1981, de 28 de Octubre, del uso de la bandera de España y el de las otras banderas y enseñas.
- Ley 1/2010, de 2 de Julio, de sociedades de capital.
- La Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional y sus protocolos de 2000.
- La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
- El Convenio de Ginebra sobre Alta Mar de 1958.
- El Convenio de Ginebra sobre Mar Territorial y la Zona Contigua de 1958.
- El Convenio de Ginebra sobre el estatuto del refugiado de 1951.
- La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.
- La Convención de derechos del niño de 1990.